

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 13, capítulo CCLIV

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Jaime Olveda

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 13, capítulo CCLIV

**Anotado y revisado por
Jaime Olveda
(El Colegio de Jalisco)**

Capítulo CCLIV

**La oposición parlamentaria se muestra
activa**

Enero y febrero de 1868

CAPÍTULO CCLIV

LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA SE MUESTRA ACTIVA

Enero y febrero de 1868

Ya hemos señalado en varias ocasiones que la Constitución de 1857, probablemente por la amarga experiencia del poder dictatorial de los Presidentes anteriores, había restringido las facultades del Poder Ejecutivo y depositado en el legislativo tales poderes que en realidad se había creado un régimen parlamentario, con el inconveniente de no haber quedado esta situación claramente establecida.

La IV Legislatura quedó instalada el 8 de diciembre de 1867, con un número limitado de diputados, ya que por diversos motivos no se presentaron todos los elegidos al desempeño de su encargo. Inmediatamente se ocupó de calificar la elección de Presidente de la República y de Presidente de la Corte Suprema, y dar entrada a varias iniciativas, sin enfrascarse en el estudio de ellas; únicamente se resolvió no hacer el cómputo de los votos emitidos en relación con la consulta directa sobre reforma constitucional propuesta en la convocatoria del 14 de agosto de 1867.

Desde luego era notoria la actitud hostil de un grupo de diputados que difirió la calificación de la elección como diputados de los Sres. Sebastián Lerdo de Tejada y Blas Balcárcel, quienes tuvieron que dejar los cargos de ministro de gobernación y relaciones, y ministro de Fomento en manos de los oficiales mayores, en espera de la licencia del Congreso en sus funciones de diputado, para poder desempeñar tales puestos en un gabinete, la que solicitó hasta el 31 de diciembre de 1867.

El 7 de enero se inició la discusión de la solicitud, continuándose al día siguiente y, finalmente, el día 8 de enero, con votación nominal de 68 votos en pro y 40 en contra, se concedió licencia a Lerdo de Tejada y

en votación económica, que resultó mayoritaria, se aprobó la licencia de Blas Balcárcel. En la discusión se destacaron las intervenciones de los diputados José María Mata y Zarco; este último hablando por las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, dijo en la parte inicial de su magnífico discurso:

Para la mayoría de las comisiones, lo mismo que para los ilustrados autores del voto particular, no hubo la menor duda en que el Sr. Lerdo de Tejada es actualmente diputado, y por lo mismo, para entrar al ministerio, necesita la licencia del Congreso. Las comisiones no vieron en el Sr. Lerdo esta trinidad fenomenal que con tanta imaginación ha pintado el Sr. Siliceo y no creyeron que era un personaje que tenía un pie en el Poder Legislativo, otro en el poder judicial y que con una mano se hacía del Poder Ejecutivo, ni infirieron de esto que fuera inmensa su popularidad ni se deslumbraron con tal popularidad para extender su dictamen. Ese fenómeno de que ha hablado el señor preopinante, no existe más que en su imaginación ni puede existir, porque su existencia sería contraria a lo que previene nuestra carta fundamental. El Sr. Lerdo no es Presidente de la Suprema Corte, porque no ha tomado posesión del cargo haciendo la protesta de estilo; no es ministro de Estado, porque ha expirado la licencia que tenía del Congreso para estar en el gabinete; es sólo diputado que necesita licencia para dejar de concurrir a las sesiones. No tiene pues, el triple carácter que ha querido dársele y de lo que a este respecto se ha dicho no resulta ningún argumento en contra del dictamen.

José María Iglesias que había estado enfermo desde octubre, insistió en su renuncia y le fue aceptada, por ello ya no fue necesario que solicitara licencia, toda vez que resolvió desempeñar el cargo de diputado. Se inicia el capítulo con el texto de la renuncia y la respuesta formal de la misma.

Fue tan sonado el debate que los periódicos lo comentaron al día siguiente, destacándose el editorial de Zarco.¹

Por esta incierta situación, Juárez no había podido reorganizar o confirmar su gabinete, lo que motivó censuras y críticas, así como

¹ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 10 de enero de 1868.

amistosas insistencias de parte de Zarco en sus editoriales del 2 y 11 de enero, que le hacen ver la necesidad de completar el gabinete y dar a conocer un programa.²

Fue hasta el 16 de enero que se dio a conocer el nombramiento de Matías Romero como ministro de Hacienda, quien tomó posesión ese mismo día, y la designación de ministro de Gobernación a favor del Sr. Luis Vallarta, de quien no se conocía todavía su respuesta. Continuaban como ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro y de Fomento, Blas Balcárcel.

Se incluye el nombramiento de Matías Romero y la muy interesante respuesta, que se complementa con la circular que envió a los gobernadores, en que bosqueja los problemas de la Hacienda Pública y apunta soluciones.

El nombramiento de Vallarta tiene la misma redacción, por lo que considero inútil reproducirlo.

En la sesión del 9 de enero, en segundo lugar, "se leyó una proposición suscrita por los Sres. Mata, Alcalde y Zamacona, pidiendo que se declare sin valor legal el decreto de 8 de noviembre de 1865, que declaró con lugar a formación de causa al Presidente de la Corte de Justicia, así como las demás disposiciones contra otros magistrados del mismo cuerpo y que se declare asimismo que todos los expresados funcionarios quedan a disposición del Congreso. Quedó esta proposición de primera lectura".³

Más adelante podremos ver las discusiones y repercusiones que esta radical y absurda proposición produjo.

Como el grupo opositor parlamentario pidió informes al gobierno sobre la situación en el estado de Guerrero, se presenta Lerdo de Tejada ante el Congreso el 11 de enero, como encargado del ministerio de Gobernación, dando una amplia explicación que se incluirá en el siguiente capítulo.⁴

² *El Siglo Diez y Nueve*, México, 2 y 11 de enero de 1868.

³ *El Globo*, México, 10 de enero de 1868, p. 3.

⁴ *El Siglo Diez y Nueve*, "Crónica Parlamentaria", México, 12 de enero de 1868.

Zamacona propuso en esa sesión que el Congreso declarara nulos los decretos expedidos por Juárez en Monterrey en 1863, dando voto pasivo a los sacerdotes; también los de Paso del Norte en relación al Gral. González Ortega y la convocatoria a elecciones.

El Congreso interpela al gobierno sobre si se ha cumplido con la ley que Juárez expidió el 17 de agosto del año anterior, en uso de las facultades omnímodas de que estaba investido. Sebastián Lerdo de Tejada se presenta a informar el 16, explicando que, aunque ya hay ministro de Hacienda, tomó posesión ese día y es razonable pensar que aún no está informado de los negocios de su secretaría. Explica que durante la guerra de Intervención se facultó a jefes militares y gobernadores que dispusieran tanto de los fondos locales como federales; pero que tan luego se consideró oportuno "esas facultades se las iba quitando el gobierno" y que, finalmente, se había expedido la ley de 17 de agosto para dar fin a esa situación. Relató cómo se cumplía en lo general, con algunas excepciones que el gobierno federal había tratado de corregir. Concluyó señalando que "hay noticia de que en algunos estados se cometen abusos; pero el ejecutivo espera que los gobernadores cumplan con sus órdenes y si no lo consigue con todos los medios que están a su alcance acudirá al Congreso a que lo apoye".

Figura en este capítulo la versión que de la intervención de Lerdo de Tejada hizo el periodista Pantaleón Tovar, porque es una exposición clara y precisa de los propósitos del gobierno en la reestructuración de la hacienda Pública.

Matías Romero, a su regreso de los Estados Unidos, había presentado al gobierno una liquidación de lo que se le adeudaba por sueldos que no se habían cubierto. Revisada y aprobada, solicitó y obtuvo, en noviembre de 1867, se le diera en pago un lote en la nueva calle de San Juan de Letrán.

Guillermo Prieto, que por esos días sostenía una franca actitud hostil al gobierno, con mordacidad comentó que "el pago era buen

introito para el nuevo ministro"⁵ lo que dio origen a molestas censuras contra Romero, pues se presentaba el arreglo como oneroso al erario y además resuelto por Romero a su favor, en sus funciones de ministro.

Otros críticos señalaron que se cubrían adeudos al ministro de Hacienda, mientras no se auxiliaba a los soldados licenciados, ni se pagaban sus pensiones a viudas y huérfanos de familiares de patriotas caídos en la reciente lucha.

Nuevamente Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la tribuna de la Cámara, el 18 de enero, ahora para defender a Matías Romero de los ataques de la oposición. De su intervención brillante y precisa sólo reproduciremos algunas expresiones categóricas:

Que no era exacto que la ley de 22 de noviembre prohibiera el pago de que se trata; que dicha ley establece el modo de cubrir ciertos créditos y no los sueldos de empleados que están en actual servicio. La conducta del gobierno está dentro de lo legal y de lo justo. No hay una sola persona de las que tiene derecho a pensiones del erario que hayan sido desatendidas.

[...]

Para concluir, el negocio se reducía a que un buen servidor del país, en pago de lo que se le debía, había recibido un lote en lugar de dinero.⁶

Como era natural, Romero no podía permanecer callado, días después envió a los periódicos una amplia explicación de lo ocurrido, acompañando copias de documentos que demostraban que habían tenido interés en adquirir ese mismo lote urbano un hijo de Guillermo Prieto y la cuñada del diputado Joaquín Alcalde, quien había sido acre censor de Romero en la Cámara. Con la acuciosidad y sencillez que le era habitual,

⁵ *El Siglo Diez y Nueve*, "Crónica Parlamentaria, Sesión del 18 de enero de 1868", México, 19 de enero de 1868, p. 1.

⁶ *Ibidem*.

Romero se limitó a demostrar que se le debían sueldos atrasados, que el anterior ministerio de Hacienda aprobó la liquidación, que ofreció un precio mayor por el lote que los otros interesados y que la operación se había realizado el año anterior. Tormenta en vaso de agua, producida por intereses mezquinos que se aprovechaba como arma política.

Por considerar que es más útil para el lector, preferimos pasar por alto en los capítulos anteriores la serie de importantes disposiciones y actos que estructuraron la nueva política hacendaría del régimen, para presentar una visión panorámica cuando fuera oportuno. Esta política fue iniciada durante la función de José María Iglesias y continuada por su sucesor Matías Romero, lo que permite afirmar que, en sus lineamientos generales, había sido concebida por Juárez.

La deuda pública, tremenda carga que el país venía arrastrando desde la consumación de la Independencia, había crecido fuertemente durante la guerra de Reforma y el Imperio. El gobierno republicano tenía que definir su política respecto a las obligaciones adquiridas por los gobiernos conservadores y el Imperio, y a la vez aprovechar la coyuntura internacional para aliviar las amortizaciones que convenios anteriores habían establecido, al destinar los ingresos aduanales al pago exclusivo de las obligaciones inglesas y españolas.

Francisco R. Calderón, en su acuciosa obra sobre la vida económica en la República Restaurada, presenta un cuadro sobre la deuda interior y exterior al triunfo de la República, que reproducimos fusionados, después de haberlos verificado en su mayor parte, con pequeñas diferencias que preferimos salvar, para no causar desorientación a los estudiosos.⁷

Tan luego se instaló el gobierno en la capital, se ordenó a los Sres. José María Bassoco, Raymundo Mora y Casimiro Callado, representantes de los acreedores españoles, que devolvieran 29,649 pesos, y a Barrón, Forbes y Cía., representantes de los acreedores ingleses, que devolvieran también 34,185 pesos, cantidades que habían recibido para ser enviadas a sus representantes. Se resolvió que con esos dineros se llevarían a cabo

⁷ *Historia Moderna de México*, Vida Económica, pp. 234 y 235.

sendas almonedas para amortizar bonos de las deudas española e inglesa. "En tales almonedas, los lotes de dinero eran rematados a los tenedores de bonos que ofrecieran el precio menor por sus valores".⁸

El ministerio de Hacienda anunció que a partir de enero de 1868, se destinarían cantidades comprendidas de cuarenta a sesenta mil pesos, que se tomarían de los productos de la renta del papel sellado y la contribución federal.

Los representantes mencionados pidieron explicaciones que el ministro Iglesias proporcionó con rapidez, fundamentando una tesis de trascendental importancia política y de excepcional ventaja económica para el país: el gobierno consideraba insubsistentes los tratados concertados en el pasado entre México y las potencias que desconocieron al gobierno legítimo y entablaron relaciones con el Imperio; que la República no desconocía la obligación de pagar los títulos legítimos y anteriormente reconocidos, pero sí desconocía los convenios internacionales que estipulaban determinadas formas de pago.

Con esta tesis se ratificaba la plena soberanía de una nación, frente a potencias que habían roto, por decisión propia, todo vínculo con el gobierno legítimo de esa nación.

En el orden práctico se aplazaban los pagos de las deudas española e inglesa y se rechazaban todas las obligaciones económicas adquiridas por el Imperio.

Para precisar el monto de la deuda flotante interna, se expidió una ley, el 19 de noviembre de 1867, reglamentando su reconocimiento y liquidación; creando al efecto dos oficinas en la secretaría de Hacienda para su estudio, aceptación y registro.⁹

Se reglamentaba la diferente situación de los créditos contra el estado: los que habían servido a la Intervención y al Imperio perdían su condición de acreedores; los créditos presentados al Imperio perdían su valor; aquellos que desearan revalidar sus títulos, siempre que en ello no hubiese sido voluntaria la presentación, deberían pagar el 3% de su valor

⁸ *Ibidem*, p. 236.

⁹ Dublán y Lozano, *Legislación Mexicana*, p. 119.

nominal a la tesorería. Se confirmó también la tesis sostenida por el gobierno desde los días de la lucha, que no se reconocerían daños y perjuicios causados por las fuerzas militares de la República ni por las del Imperio y los invasores.

El 20 de noviembre¹⁰ se expidió un decreto para depurar la deuda consolidada: Se aceptaban los bonos de 1850 para convertir la deuda pública anterior, los certificados emitidos por la tesorería general en 1861 y los bonos puestos en circulación al iniciarse 1862. Las obligaciones anteriores a 1850, que no se habían canjeado, se aplazaban indefinidamente y se les castigaba en un 10% de su valor nominal. Se advertía que los créditos presentados a los diversos gobiernos emanados de la Intervención, habían perdido todo su valor, excepto que se pudiera probar que ello había sido bajo coacción, debiendo sus tenedores hacer un pago de 4% de su valor nominal a la tesorería.

Al examinar y analizar toda esta serie de acertadas disposiciones, completamente justificadas, si bien insólitas y que se apartaban de la ortodoxia jurídica y de las prácticas internacionales, el régimen presidido por Juárez establecía precedentes revolucionarios que más tarde sostuvo la revolución mexicana, pero que lamentablemente no pudo aplicar en todos los casos, por ser otra la situación internacional después de 1917.

Los gobiernos de los afectados en 1867, no estaban en condiciones de oponerse a las decisiones del gobierno mexicano: Francia prefirió pagar a los tenedores de los bonos del fracasado Imperio un subsidio de 87 millones de francos; Inglaterra, escarmentada con la experiencia francesa, resolvió esperar y España, enfrascada en graves problemas políticos internos, no podía pensar en una aventura internacional.

Conviene hacer notar que por estas hábiles disposiciones, los acreedores se convirtieron en deudores y con la esperanza de legalizar la vigencia de sus títulos, ocurrieron al gobierno haciendo pagos que le fueron útiles en esos días de apremios económicos.

Calderón, en forma acertada, resume las respuestas que el ministro Iglesias ofreció a todas esas críticas:

¹⁰ Dublán y Lozano, *Legislación mexicana*, p. 123.

"El ministro Iglesias decía que no se obligaba a los acreedores a amortizar sus títulos en almoneda, pues tal acto era voluntario y espontáneo; quien no acudiera a ese procedimiento, conservaba expedito su derecho de reclamar el pago de su deuda, el cual se haría cuando lo permitieran las circunstancias del erario. La obligación de pagar un 3 o 4% del valor nominal de los títulos para revalidarlos era una medida no de rigor, sino de lenidad, pues, según el decreto de 22 de octubre de 1863, los tenedores de bonos perdían todo derecho a su crédito por el hecho de presentarlos al Imperio. Así, lejos de que el nuevo decreto convirtiera a los acreedores, en deudores, devolvía el carácter de acreedores a quienes habían dejado de serlo por una ley anterior; la devolución se conseguía, en realidad, después de una sanción pecuniaria. El ministro Iglesias añadía que semejante sanción era más aparente que real: los bonos, cuyo cobro requería la revalidación, se cotizaban al 10% de su valor nominal, y los buenos, aquellos que no habían sido presentados al Imperio, a 15; para igualar aquellos a éstos se necesitaba un desembolso del 3 ó del 4% dejando, en todo caso, un margen."¹¹

Como resultado de esta sabia política, el ministro Iglesias, no obstante sus meses de enfermedad, reduce a 86 967,355 pesos la deuda reconocida; aplazó por tiempo indefinido el pago de 12 000,000 de pesos; rechazó definitivamente 329 382 160 pesos y afectó a otros acreedores en 8.500,000. En resumen, una deuda de 454 millones de pesos la redujo a 87 millones.

Se reproduce en el capítulo el cuadro tomado de la obra de Calderón¹² que muestra la situación encontrada por Matías Romero a su llegada a la secretaría de Hacienda, a mediados de enero de 1868.

Otro aspecto que tuvo que abordar la República triunfante fue reducir los gastos y por ello, como acertadamente ha dicho Daniel Cosío Villegas, fue necesario que "Marte se encogiera",¹³ reduciéndose el ejército de 60,000 hombres a 20,000 soldados.

¹¹ *Historia Moderna de México*, Vida Económica, pp. 239 y 240.

¹² *Ibidem*, pp. 241 y 242.

¹³ *Historia Moderna de México*, Vida política, p. 124.

Había también que formular y poner en vigor un presupuesto, pensamiento en el que coincidieron Congreso y ejecutivo, pero que era difícil de poner en ejecución.

A los pocos días de haber tomado posesión Matías Romero, la diputación de Querétaro presentó la iniciativa que el Congreso aceptó, de que se pusiera en vigor el presupuesto de 1861 en forma provisional y se pidió al ejecutivo que, en un plazo de quince días manifestara las modificaciones a ese presupuesto.

Matías Romero no estuvo de acuerdo con esta idea y prefirió enviar un proyecto de presupuesto, el que, después de numerosas discusiones, fue aprobado hasta abril y referido al segundo semestre de 1867 y primer semestre de 1868.

A partir del 1° de febrero se hizo el cómputo en el Congreso de los votos emitidos para designar a los miembros de la Corte Suprema, pues sólo se había hecho el escrutinio de los votos para Presidente de ese cuerpo. Constituido en colegio electoral, el Congreso dedicó sus sesiones de 1°, 3 y 4 de febrero, haciendo, finalmente, la declaración de quienes habían sido elegidos como integrantes de la Corte y procurador. Para la generalidad de ellos señaló que su periodo se iniciaría el 10 de febrero inmediato y que concluiría el 9 de febrero de 1874. Para los ministros 1° y 6°, en cambio, después de largas discusiones, se fijó que su periodo de seis años se iniciaría el 31 de mayo siguiente o antes si los sitios quedaran vacantes, toda vez que aún se consideraba como ministros a Manuel Ruiz y Juan J. de la Garza.

Como los diputados José María Montes, Ezequiel Montes y Manuel María de Zamacona, elegidos 2°, 4° y 7° ministros, prefirieron conservar sus cargos de legisladores, quedaron vacantes esos sitios en la Corte.

El 10 de febrero, en forma solemne, rindieron la protesta como magistrados los Sres. Vicente Riva Palacio, Joaquín Cardoso, José María Lafragua, José García Ramírez, José María Castillo Velazco, Luis Velázquez y Mariano Zavala; como fiscal, Ignacio Manuel Altamirano y como procurador, León Guzmán.

El gobierno, dentro de la política que se había trazado de ir borrando asperezas y buscar a la vez una conciliación que permitiera alcanzar la unidad nacional a corto plazo, fue generoso en la concesión de indultos y en la rehabilitación de algunos que, por tibieza o falta de entereza, tuvieron relaciones con el Imperio o le sirvieron en puestos de poca importancia.

No obstante que en realidad no estaba en desacuerdo con ese proceder, el grupo opositorista, dentro y fuera del Congreso, señaló esa línea de conducta como indebida y se usó como arma política contra el régimen.

En la sesión del 15 de febrero, se propuso se expidiera una ley anulando las rehabilitaciones concedidas por Juárez y prohibiendo que ocuparan cargos gubernamentales personas señaladas por haber servido o sostenido contacto con el Imperio.

José María Mata, jurista capaz, se opuso a la expedición de esa legislación y se preocupó porque la prensa publicara el texto revisado de su discurso para dejar bien precisada su posición. Inconforme con el proceder del ejecutivo, consideraba que no era posible cancelar retroactivamente las rehabilitaciones concedidas, ni tampoco limitar la facultad constitucional del Presidente de nombrar a sus colaboradores. Proponía, eso sí, una especie de voto de censura al gobierno; a la vez sugería se expidiera una ley que señalara como requisito para desempeñar un empleo público, no haber servido a la Intervención o al Imperio.

Por considerarlo muy importante, este discurso se reproduce en el capítulo.

El diputado Peña y Ramírez propone, en la sesión del 17 de febrero, se ratifique por el Congreso el decreto de 8 de noviembre de 1865, en virtud del cual Juárez prorrogó su mandato y también se expida una ley de amnistía a favor de quienes, se opusieron a este acto. Puesta a discusión esta propuesta en la sesión del 20 de febrero, inmediatamente el diputado Ezequiel Montes pronunció un discurso oponiéndose. Por su valiosa argumentación se reproduce en el capítulo. Montes señaló que el Congreso no tenía facultades para revisar los actos del gobierno de

Juárez, del 11 de diciembre de 1861 al 8 de diciembre de 1867, por el uso de las facultades omnímodas de que estuvo investido. Su parecer fue aceptado y quedó desechado el proyecto.

Desde principios de febrero se inició la discusión sobre una ley general de amnistía y un reglamento del gobierno del Distrito Federal. Este último muestra cómo desde hace años se hacía patente la inconformidad sobre la extraña situación de esta entidad, donde se asienta la capital de la República, y sus habitantes han tenido limitaciones para designar sus autoridades, proceso cada vez más acentuado en nuestros días, en que se hicieron desaparecer a los ayuntamientos.

Otro nuevo incidente que mostró la actitud de la oposición parlamentaria se produjo al examinar el caso del Gral. Gaspar Sánchez Ochoa, distinguido militar que, enviado por el Gobierno a negociar un empréstito a los Estados Unidos, fracasó en su intento y posteriormente se incorporó al grupo del Gral. González Ortega. Distanciado de este último, tuvo la nobleza de reconocer su error y escribió a Juárez en ese sentido.¹⁴

Después del triunfo de la República, volvió clandestinamente al país y se estableció en San Luis Potosí. Inmediatamente el gobierno lo declaró sujeto a proceso. Posteriormente triunfó como candidato a diputado federal por el distrito de Santa María del Río, y en la sesión del Congreso del 26 de febrero se examinó su caso con la presencia del secretario de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, que había sido llamado a propuesta del diputado José María Iglesias.

El debate fue movido, participando los diputados Mercado, Ramón Guzmán, Zamacona, Guillermo Prieto, Manuel Rojo, Dondé, Lozano, Silíceo, Montes, e intervino varias veces el secretario de Relaciones, encargado del ministerio de Gobernación, Lerdo de Tejada.

Se reproduce en el capítulo la crónica de la sesión, eliminando algunos párrafos en que se relatan cuestiones de trámite. Podrá observarse la agresividad y pasión de Zamacona, la sensatez y buen

¹⁴ Véase tomo 11.

juicio de Ezequiel Montes que, estando en la oposición, reconoció que el punto de vista del ejecutivo era correcto.

Especialmente llamamos la atención de los lectores sobre la habilidosa argumentación de Lerdo de Tejada, quien hizo ver al Congreso que, de hecho, había ratificado los decretos de Juárez destituyendo al Gral. González Ortega, pues al instalarse no le ordenó entregara el gobierno al Presidente de la Corte y también reconoció la elección de Juárez, en lugar de llamar a González Ortega.

Una semana después, en la sesión del 3 de marzo, fue llamado el ministro de Hacienda, Matías Romero, para que informara en relación sobre el proyecto de "Ley de Clasificación de Rentas" que había presentado la primera comisión de Hacienda de la Cámara. Se suscita una discusión y, al finalizar, el diputado Zamacona hizo al Sr. Romero algunas preguntas que éste contestó en la sesión del 5 de marzo. Por tratarse de cuestiones de interés, que muestran la política seguida por el gobierno para reorganizar la hacienda pública, a la vez que permiten observar la actitud del Congreso frente al ejecutivo, se reproduce la crónica de esta sesión, eliminando aspectos de trámite y dejando sólo las intervenciones de Romero y las réplicas del diputado Zamacona. La discusión versó sobre las franquicias concedidas en 1866 para facilitar la comunicación del gobierno de Chihuahua a San Antonio, Tex.; también sobre los sucesos de Guaymas, provocados por la arbitrariedad del gobernador de Sonora, que ya hemos conocido en capítulos anteriores y otro incidente en Manzanillo.

Con seguridad, Romero presenta amplia información y da prolijas explicaciones; sin embargo, Zamacona insiste en sus críticas, ya sin razón.

Al finalizar esa sesión, el ejecutivo envió la iniciativa de que se declarara en vigor la ley del 25 de enero de 1862, expedida contra los que apoyaran a los invasores y ahora para ser aplicada a los salteadores, plagiarios y sublevados contra el régimen. Nuevamente se provoca una discusión, pues Zamacona objetaba el trámite. Por mayoría de votos se envía para estudio a la comisión de Gobernación.

Creemos que los lectores completarán su versión sobre la actitud del Congreso, con la lectura de la crónica de esta interesante sesión.

Para cerrar este capítulo, en que ha sido actor Matías Romero, se reproduce el acuerdo por el que se comisiona a Manuel Payno para que, reuniendo los documentos justificativos, formule la historia hacendaría del Imperio.

Enterado tardíamente el Gral. José María Carbajal, de la carta de Matías Romero de 29 de noviembre del año anterior, sobre la actuación de los diversos comisionados para negociar empréstitos en los Estados Unidos durante la Intervención, envió el 1° de febrero de 1868, una carta al director de *El Siglo diez y nueve*, Francisco Zarco, refutando a Matías Romero, por lo que hace a la intervención que tuvo y criticándolo de paso. Con esta comunicación termina el capítulo.

JOSÉ MARÍA IGLESIAS RENUNCIA
AL MINISTERIO DE HACIENDA

Ciudadano oficial mayor
del ministerio de Relaciones
Presente

Quedo enterado, por la comunicación que con fecha de ayer se ha servido usted dirigirme, de que el ciudadano Presidente no ha tenido a bien admitir la renuncia colectiva que hicimos el 25 del corriente, los que tuvimos la honra de formar hasta ese día su Ministerio.

Muy agradecido a esa nueva muestra de confianza del ciudadano Presidente, desearía poder corresponderla no separándome de la secretaría que ha estado a mi cargo últimamente, pero me encuentro en la imposibilidad de hacerlo por circunstancias independientes de mi voluntad.

Mi salud lleva tiempo de estar gravemente quebrantada. Los médicos que me han reconocido opinan que necesito completo descanso para recobrarla. En consecuencia, el restablecimiento de mi salud es de todo punto incompatible con mi permanencia en el ministerio de Hacienda.

Por tan poderoso motivo, me veo obligado a insistir en la renuncia que tengo hecha, y que de la bondad del ciudadano Presidente espero que me sea admitida.

Sírvase usted manifestárselo así de mi parte, haciéndole presente, a la vez, que le doy las más sinceras y expresivas gracias por las distinciones que me ha prodigado, en el largo periodo de más de

cincuenta y un meses que me ha cabido la honra de formar parte de su gabinete.

Independencia y Libertad. México, diciembre 28 de 1867.

José M. Iglesias

SE ACEPTA LA RENUNCIA DE IGLESIAS

Ciudadano Lic. José María Iglesias
Presente

He dado cuenta al ciudadano Presidente de la República del oficio de anteayer, en que me manifiesta usted que, por ser incompatible el restablecimiento de su quebrantada salud con su permanencia en el ministerio de Hacienda, se ve obligado a insistir en la renuncia que hizo el 25 de este mes.

El ciudadano Presidente ha admitido la renuncia que ha reiterado usted para separarse de su gabinete, sólo en consideración del grave motivo de ella y, al acordar que lo comunique a usted, me ha encargado que le presente la alta estimación que tiene el gobierno de los importantes servicios que ha prestado usted a la nación en el desempeño de la secretaría que ha estado a su cargo, cumpliendo sus deberes de la manera más satisfactoria en la época más difícil de la administración de la República.

Lo que tengo la honra de decir a usted en respuesta a su citado oficio.

Independencia y Libertad. México, diciembre 30 de 1867.

M. Azpíroz
Oficial Mayor (del Ministerio
de Gobernación)

Son copias. México, enero 2 de 1868.

Manuel Azpíroz
Oficial Mayor

A MATÍAS ROMERO SE LE NOMBRA SECRETARIO DE
HACIENDA

Ciudadano Lic. Matías Romero
Presente

Atendiendo al muy acreditado patriotismo, aptitud, ilustración y demás cualidades de usted, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a usted secretario de estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público, esperando que aceptará usted este encargo, para prestar en él sus importantes servicios.

Tengo la honra de comunicarlo a usted, protestándole mi muy atenta consideración.

Independencia y Libertad. México, enero 15 de 1868.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

ROMERO ANALIZA POR QUÉ ACEPTA EL CARGO

México, enero 15 de 1868

Ciudadano ministro de Relaciones Exteriores
Presente

He tenido la honra de recibir la comunicación que se sirvió usted dirigirme con esta fecha, informándome que el ciudadano Presidente ha tenido a bien nombrarme secretario de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público.

Altamente reconocido a esta otra prueba de confianza con que me honra de nuevo el primer magistrado de la nación, manifiesto a usted que acepto el cargo que se me confía, solamente por deferencia a los deseos del Presidente y por respeto a su sano juicio; pero de ninguna manera por creerme con los requisitos necesarios para desempeñarlo debidamente. En efecto, mis inclinaciones y mis hábitos no me han permitido hasta aquí estudiar concienzudamente las cuestiones financieras de nuestra patria, y bajo este aspecto, no puedo llevar al difícil ministerio a que ahora se me llama, más que la determinación firme de administrar con pureza los caudales públicos, la disposición de aprovecharme de las lecciones que me dé la experiencia, para establecer algo que pueda considerarse como un sistema de hacienda, que hasta aquí nos ha faltado, y el deseo vehemente de cooperar, con el Presidente, en la grandiosa y patriótica obra de consolidar la paz, el orden y las instituciones de la República.

Reproduzco a usted las seguridades de mi muy distinguida consideración.

Matías Romero

CIRCULAR DE MATÍAS ROMERO A LOS GOBERNADORES

México, enero 17 de 1868

Sr. don ...

Muy señor mío:

Llamado por el Presidente de la República a formar parte de su gabinete, he creído no debía rehusarle mi cooperación en el cargo que me ofreció, por más que mi inexperiencia y mi falta de conocimientos prácticos en el difícil ramo que me ha confiado, fueran un poderoso retraente que me hicieron vacilar mucho, antes de decidirme a aceptar el ministerio de Hacienda.

Si la paz y el orden público estuvieran ya plenamente arraigados y no hubiera perspectiva de dificultades para lo futuro, probablemente no me habría yo creído en el deber de aceptar el cargo que se me ha encomendado; pero como la situación de la República, aunque mucho más halagüeña a mi juicio, de cuantas ha habido hasta aquí, no está aún exenta de dificultades graves y peligros serios, he creído que, como buen mexicano, no debía rehusarme a prestar los servicios que el supremo magistrado de la nación exigiera de mí, para ayudarlo en la grande obra de cimentar la paz en México y desarrollar los inmensos elementos de nuestra patria.

El escollo principal contra el que se han estrellado varias de las administraciones pasadas de la República, ha sido la falta de recursos. Yo creo que el país tiene los necesarios para sostener su gobierno y cubrir sus gastos más urgentes, y que, bien administradas sus rentas, se podrán satisfacer todas las necesidades legítimas, y de esta manera se contribuirá muy eficazmente a consolidar la paz en México y a cimentar, bajo bases sólidas y estables, las instituciones que el país se ha dado libremente.

Como en este resultado están igualmente interesados todos los ciudadanos amantes de su patria, que desean de buena fe su bienestar y engrandecimiento, al aceptar el ministerio que se me ha confiado, lo he hecho contando con la cooperación de todos los buenos mexicanos y, especialmente, con la muy eficaz de los señores gobernadores de los estados, que tanto pueden hacer por conseguir el resultado que todos tan ardientemente deseamos.

Las relaciones entre los estados y la federación son de tal naturaleza en nuestro sistema de gobierno, que no es posible que haya malestar en el gobierno federal, sin que éste se haga sentir en los estados, y, viceversa, que el bienestar del gobierno de la unión no puede menos que contribuir muy poderosamente a la prosperidad de los estados. El gobierno de la unión tiene sus rentas especiales y los estados están dotados de las suyas propias. El gobierno de la unión, empeñado en el bien de los estados, no tratará de privarlos de sus rentas privativas; pero, a su vez, espera que los estados tampoco lo privaran de las que le corresponden. No habría orden, sistema ni hacienda posibles en la República, si los estados, con pretextos más o menos plausibles, impidieran que el gobierno general disponga de las rentas que le señalan las leyes, y que bien recaudadas y administradas con pureza, apenas alcanzarán para sus más urgentes atenciones.

Teniendo plena confianza en el patriotismo y buen juicio de los ciudadanos a quienes los estados han elegido para regir sus destinos, no he vacilado ni por un momento en que satisfechos de la conveniencia y necesidad de que se observen las leyes y de que el gobierno federal tenga recursos con qué subsistir, me prestarán su muy importante cooperación, impidiendo que las autoridades locales se apoderen de los recursos de la federación, y contribuyendo además de esa manera a restablecer la moralidad tan necesaria para consolidar nuestras instituciones.

Como soy hasta cierto punto ajeno al ramo de hacienda, no tengo hasta ahora plan ninguno financiero para lo futuro. El que yo forme, si permanezco en este puesto el tiempo necesario para madurarlo, será el resultado de la experiencia. Por ahora, solamente procuraré cuidar, con el mayor empeño, de que se recauden todas las rentas de la federación y que

se distribuyan con equidad y pureza. En el primero de estos puntos, usted puede ayudarme muy eficazmente.

Me parece excusado decir a usted que recibiré, con toda la deferencia de que son dignas, las indicaciones que tuviese usted la bondad de hacerme con el objeto de conseguir el resultado que me propongo.

Soy de usted muy atentamente su seguro servidor.

Matías Romero

LERDO DE TEJADA INFORMA AL CONGRESO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA LEY DE 17 DE AGOSTO DE 1867¹⁵

El Congreso pidió informe al gobierno sobre si se ha dado cumplimiento a la ley de 17 de agosto, que separa las rentas federales de las de los estados. Como hoy, según sabe el Congreso, tomó posesión del ministerio de Hacienda el ciudadano Matías Romero, no es posible que tenga tan pronto los antecedentes que se necesitan, y por esto el ciudadano Presidente dispuso que yo viniera a informar.

El Congreso sabe que durante la guerra y en virtud de las circunstancias, los jefes militares y los Gobernadores fueron investidos con ciertas facultades por las que podían disponer de todas las rentas de los estados y de la federación. Esas facultades se las iba quitando el gobierno, conforme desaparecía la situación que las hizo necesarias. Al llegar a México queriendo poner orden completo en la administración, expidió la ley que motiva este informe, ley que no sólo prohíbe disponer de los caudales federales, sino que tiene en sí providencias para impedir ese hecho. Pocos casos se han dado de que se haya faltado a esa ley.

En Mazatlán, el gobierno de Sinaloa permitió una introducción de efectos contra el tenor expreso de las leyes. El administrador, en cumplimiento de su deber, se retiró de su puesto. Supo el caso el gobierno y ordenó que las cosas volvieran al estado anterior, es decir, que se repusiera al administrador en su empleo, que ya desempeñaba otro ciudadano nombrado por el gobierno de Sinaloa y que a los efectos se les cobraran las cuotas que previene el arancel.

En Guaymas, por una infracción de las leyes federales que cometió el jefe de hacienda, fue destituido y se recomendó al gobernador que no faltara a las leyes federales. En el mismo puerto se permitió la

¹⁵ Discurso pronunciado en el Congreso, el 16 de enero de 1868.

introducción de efectos con una rebaja de 40% en los derechos. El administrador de la aduana se separó cumpliendo con su deber. Las autoridades nombraron otro y fue introducido el cargamento. El gobierno ha resuelto reponer al administrador y como la importación de esos efectos puede tener consecuencias contra el comercio de Mazatlán, San Blas y el Manzanillo, pues el Congreso sabe que si en algún puerto se introducen efectos con baja de derechos, se llevan a otros puertos ya nacionalizados y esto perjudica al erario; el gobierno ha resuelto que a los introducidos por Guaymas se les cobren todos los derechos y ha prevenido a los administradores del Manzanillo, San Blas y Mazatlán, que no den paso a más efectos sino a los que tengan sus documentos expedidos en regla por el empleado federal de Guaymas.

Se ve, pues, que en cuanto ha llegado a conocimiento del gobierno una infracción de la ley de 17 de agosto ha acudido a remediar el mal. Hay noticia de que en algunos estados se cometen abusos; pero el ejecutivo espera que los gobernadores cumplan con sus órdenes y si no lo consiguen con todos los medios que están a su alcance acudirá al Congreso para que lo apoye.

(16 de enero de 1868)

DEUDA PÚBLICA EN JULIO DE 1867

Deuda flotante:		
Conducta de Laguna Seca	\$ 338,000	
Reclamaciones, préstamos, etc.	Desconocido	\$ 338,000 ¹⁶
Deuda consolidada:		
Bonos de la ley de 30-XI-50	\$ 9.045,014	
Créditos de pago diferido	12.000,000	
Bonos Zuloaga	10.000,000	
Bonos del clero	819,186	
Bonos Peza	36.906,446	
Certificados de Tesorería	56,211	
Bonos Núñez	1.504,747	
Bonos del ferrocarril	<u>8.000,000</u>	\$ 78.331,604
DEUDA EXTRANJERA:		
A Inglaterra	\$ 73.645,067	
A España	7.766,211	
De la Intervención:		
Imperial	281.656,528	
Republicana	<u>12.425,450</u>	\$ 375.493,256
DEUDA INTERIOR:		
Flotante	\$ 338,000	
Consolidada	<u>78.331,604</u>	\$ 78.669,604
Total		\$ 454.162,860

¹⁶ Dato incompleto.

DEUDA PÚBLICA AL FINALIZAR 1867

DEUDA RECHAZADA:

Imperial:

Préstamo 11-IV-64	\$ 22.000,000	
Otros préstamos de 1864	40.320,020	
Préstamo de 1865, 1ª serie	50.000,000	
Préstamo de 1865, 2ª serie	50.000,000	
Deuda inglesa, 1ª consolidación	51.617,916	
Deuda inglesa, 2ª consolidación	24.518,592	
Gastos de guerra (Miramar)	<u>43.200,000</u>	\$ 281.656,528

Consolidada:

Bonos Zuloaga	10.000,000	
Bonos del clero	819,186	
Bonos Peza	<u>36.906,446</u>	<u>47.725,632</u>
		\$ 329.382,160

DEUDA PERJUDICADA: ¹⁷

Bonos de la ley de 30-XI-50	\$ 7.000,000	
Bonos Núñez	<u>1.500,000</u>	
		\$ 8.500,000

DEUDA DIFERIDA:

Anterior al 20-XI-50		12.000,000
----------------------	--	------------

DEUDA RECONOCIDA:

Inglaterra:

De Londres	\$ 70.071,383
------------	---------------

¹⁷ Se llamaban "perjudicados" a los títulos presentados a las autoridades del Imperio, cuya revalidación exigía el pago previo de 3 o 4% sobre su valor nominal.

Convenciones inglesas	<u>3.573,684</u>	\$ 73.645,067
España:		
Convención española	\$ 7.766,211	
Convención padre Morán	<u>742,866</u>	8.509,077
Republicana		<u>2 425,450</u>
		\$ 84.579,594
Flotante:		
Conducta de Laguna Seca	\$ 338,000	
Reclamaciones, préstamos, etc	Desconocido	\$ 338,000 ¹⁸
Consolidada:		
Deuda de la ley de 30-XI-50	\$ 2.045,014	
Bonos Núñez	4,747	<u>049,761</u>
		\$ 86.967,355

¹⁸ Dato incompleto.

EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA MATA CRITICA AL GOBIERNO POR SU CONDESCENDENCIA CON LOS ANTIGUOS IMPERIALES¹⁹

El proyecto que se discute es de un carácter grave y si se elevara al rango de ley, produciría consecuencias cuya trascendencia es preciso meditar. La arbitrariedad y, diré más, la torpeza de los actos del ejecutivo, ocasiona que heridos los sentimientos de justicia de los representantes del pueblo, se vean impulsados a buscar un medio de poner coto a esos actos en que preside el favor y la arbitrariedad y en que para nada se ha tenido en cuenta lo que exige la justicia y la conveniencia pública.

Yo me asocio al sentimiento de que están animados los autores del proyecto; pero no puedo aceptar el medio que proponen, porque, si lo aceptáramos, falsearíamos la base sobre que descansa toda la administración del país. El Presidente de la República, en virtud de las autorizaciones que le concedieron los Congresos de 1861 y 1863, autorizaciones que yo combatí con mi voz y con mi voto, porque siempre he sostenido que el Congreso no tiene más facultades que las que derivan del código fundamental, y éste en su artículo 54 prohíbe que se reúnan dos o más poderes en una persona o corporación y que se deposite el legislativo en un individuo; en virtud de esas autorizaciones, digo, el Presidente ha estado legislando en todas materias y el país con su aquiescencia ha sancionado esos actos, y a pesar de que son evidentemente anticonstitucionales tenemos que aceptarlos como emanación de un gobierno de hecho legitimados por la sanción del pueblo.

De estos principios deduzco yo que las rehabilitaciones concedidas por el ejecutivo mientras estuvo investido de la facultad legislativa, son

¹⁹ Discurso pronunciado en el Congreso, en la sesión del 15 de febrero de 1868.

actos irrevocables que no tenemos derecho de anular, como no tendríamos derecho de hacerlo si esos actos hubiesen emanado de otro Congreso. Si nosotros anulásemos uno solo de los actos del ejecutivo que se derivan de las autorizaciones que le fueron concedidas, desquiciaríamos todo el edificio en que descansa toda la actual organización del país, porque la ley de convocatoria, en virtud de la cual nos hallamos aquí vendría por tierra y con ella todos los poderes constituidos.

Debemos, pues, meditar mucho antes de adoptar una resolución como la que se nos propone, y en la que indudablemente campea más el sentimiento y la pasión que no la reflexión acerca de las consecuencias que podría producir.

Hay además en contra del proyecto que se discute otra consideración que debo hacer presente al Congreso, y es esta: la fracción II del artículo 85 de la Constitución expresa que es facultad del Presidente nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes, y si el Congreso, adoptando el proyecto, impusiese al ejecutivo la obligación de separar de sus puestos a individuos a quienes rehabilitó usando de las facultades legislativas, y a quienes colocó en empleos de la federación en virtud de sus facultades constitucionales, cometeríamos una usurpación de poder invadiendo las atribuciones del ejecutivo.

Así es que por más que sea digno de lamentarse el modo arbitrario e irritante con que el ejecutivo ha procedido no solamente en la cuestión de empleados, sino en la de rehabilitación de las viudas y huérfanos y en el castigo de los delincuentes, -mientras ejerció el poder dictatorial esos actos están fuera de nuestra competencia y tenemos que aceptarlos como tantos otros que son consecuencia de la monstruosa situación que hemos atravesado desde 1861 hasta el día 8 de diciembre del año próximo pasado, en que cesaron las facultades discrecionales.

En cuanto a las rehabilitaciones concedidas por el ejecutivo después del 8 de diciembre, la acción del Congreso está libre y expedita, pues el ejecutivo no ha tenido facultad alguna para concederlas. Esas rehabilitaciones son la consecuencia del hábito contraído de ejercer el

poder sin freno y sin restricción y esto justifica la oposición que hicimos algunos diputados a que continuasen siendo ministros bajo el orden constitucional los mismos individuos que lo fueron durante la dictadura, porque el mal que ha resultado y que preveníamos, no es mal accidental, está en las leyes de la naturaleza, porque el hombre no puede cambiar de hábitos con la facilidad con que se cambia una levita o una camisa.

El Congreso puede, en uso de sus legítimas facultades, expedir una ley que fije las condiciones que deben tener los individuos que quieran optar empleos federales, y podrá por este medio poner coto al favoritismo y a la injusticia con que procede el ejecutivo en la provisión de empleos. Esa ley podría estar concebida en estos términos: "Es requisito indispensable para optar empleos públicos de la federación no haber prestado servicios a la Intervención o al llamado Imperio." Mas tratándose de los empleados que actualmente existen y que han sido nombrados por el ejecutivo en virtud de las rehabilitaciones que concedió mientras ejerció facultades legislativas, esto es, hasta el 8 de diciembre último, no podemos expedir ley alguna para separarlos sin que ésta tuviese un carácter retroactivo y sin que cometiésemos una invasión de las facultades constitucionales del ejecutivo.

Pero hay, además de los medios que he indicado, otro que el Congreso podría adoptar y consistiría en manifestar, por medio de un voto que no tendría el carácter de ley, el disgusto con que los representantes del pueblo ven en los puestos públicos a los que prestaron servicios a la Intervención o al Imperio, y yo lo formularía en los términos siguientes: "El Congreso de la unión ve con desagrado que se hallen colocados como empleados de la federación individuos que sirvieron a la Intervención o al llamado Imperio." Una resolución semejante que no ejercería coacción legal sobre el ejecutivo, pero que sí importaría una coacción moral bastante poderosa, sería quizá suficiente a remediar el mal que se lamenta sin exponernos a los inconvenientes de que se ha hecho mérito, pues ante una declaración semejante, es difícil que el ejecutivo mantuviese empleados que rechaza la opinión del país y la voluntad del Congreso.

Hoy no existe ya la absurda máxima, herencia del gobierno colonial, de que los empleos son propiedad de los que los desempeñan y en virtud de la cual bastaba que una persona hubiera una vez puesto sus pies en una oficina para que obtuviera el empleo en propiedad y no pudiera ser separado de él. Todo esto ha sido abolido por la Constitución y el Presidente puede remover los empleados a su arbitrio.

A semejante declaración, prestaría yo mi apoyo con tanta más razón, cuanto que en las peticiones que algunas infelices viudas han elevado al Congreso, se quejan de que los empleados que en tiempo del usurpador las trataban con el mayor desprecio cuando iban a solicitar algún auxilio, son los mismos que ahora, en tiempo de la República, las tratan con mayor insolencia, y fuera de otras consideraciones nada nos parece tan indigno como el acto de tratar con desprecio y con insolencia a infelices mujeres que por el doble carácter de que se hallan investidas son dignas de respeto y de consideración.

EZEQUIEL MONTES SE OPONE SE REVISE
LA ACTUACIÓN DE JUÁREZ DE 1861 A 1867²⁰

Presidencia del ciudadano Guillermo Valle

Se dio segunda lectura al proyecto de ley del ciudadano Peña y Ramírez sobre que se ratifique el decreto expedido por el gobierno el 8 de noviembre de 65, en virtud del cual se prorrogó el ciudadano Presidente en el poder; y también sobre que se amnistie a los que se opusieron a aquel acto. Se puso a discusión si se admitía.

El ciudadano Montes:

"Hago uso de la palabra, para que el Congreso niegue su voto al proyecto que se acaba de leer; y para eso, me bastará hacer una relación de los antecedentes. (El orador refiere la historia de las facultades omnímodas, y continúa.) De los hechos que acabo de relatar, resulta esta proposición: El gobierno desde 11 de diciembre de 1861 hasta 8 de diciembre de 1867, ha podido hacer todo cuanto podía el Congreso, menos atacar la independencia, decidir negocios judiciales del orden civil, contrariar las preeminencias del fuero constitucional, admitir intervención ninguna extranjera por medio de tratados o de cualquiera otra manera, ni enajenar el territorio nacional.

"También de esos antecedentes resulta esta consecuencia: El Presidente, en virtud de las facultades omnímodas de que estaba investido, pudo prorrogarse en el poder, con el fin de continuar haciendo la guerra a la Intervención y al llamado Imperio, de conservar la autonomía del país, y de salvar la independencia nacional. Discutir esto, sería dudar de la legitimidad de los actos del periodo citado, hasta que el

²⁰ Fragmento de la crónica parlamentaria de la sesión del 20 de febrero de 1868 del Congreso.

Congreso declaró quién es el primer magistrado de la República y como en el mencionado tiempo han pasado hechos de grande importancia, creo que se debe reprobar el proyecto que se discute.

"Para pedirlo así, me fundo, además, en que no hay ningún artículo en las diversas leyes sobre facultades omnímodas, que faculte al Congreso para revisar los actos de la dictadura que instituyeron. En vista de esto, pido que no se admita a discusión el proyecto que se ha presentado".

EL CASO SÁNCHEZ OCHOA EN EL CONGRESO

Crónica parlamentaria de la sesión del día 26 de febrero de 1868

Presidencia del ciudadano Guillermo Valle

Se dio lectura a un dictamen de la mayoría de la comisión de poderes, consultando la aprobación de la credencial del ciudadano (Gaspar) Sánchez Ochoa, como diputado por Santa María del Río (Estado de San Luis Potosí).

La parte expositiva del dictamen contiene las observaciones que, con motivo de un oficio de la comisión, hace el gobierno contra la aprobación de la credencial y las razones que la misma comisión opone a las del gobierno, el cual dice que, si no se creen suficientes, las amplificará a la hora de la discusión.

El ciudadano Mercado: Siendo grave el negocio, como lo creen el gobierno y la comisión, pido se lea el oficio relativo del ministerio.

El ciudadano alcalde, secretario, leyó el oficio y en seguida preguntó: ¿Se discutirá este negocio después de que concluya el debate sobre la "Ley de clasificación de rentas"?

El ciudadano Prieto: La pregunta es para los casos ordinarios del Congreso, pero ahora no somos Congreso, sino colegio electoral.

El ciudadano Valle, Presidente: No somos colegio electoral, sino Congreso.

El ciudadano (Joaquín) alcalde, secretario: ¿Se aplaza la discusión de esta credencial?

El ciudadano Ramón Guzmán pidió votación nominal. El Congreso resolvió por la negativa, por 64 votos contra 54.

El ciudadano Vaca, secretario: Está a discusión.

El ciudadano Iglesias: Manifestando el gobierno en su oficio que explayaría sus informes, pido que se llame al ciudadano ministro de gobernación para que tome parte en la discusión.

El ciudadano alcalde, secretario: ¿Se toma en consideración el dictamen de la comisión?

El Congreso decidió que sí.

Estando presente el ciudadano ministro de Gobernación (Sebastián Lerdo de Tejada)²¹ tomó la palabra y manifestó que el ciudadano Gral. Sánchez Ochoa, a petición de él mismo, fue comisionado por el gobierno en 1865, para conseguir un préstamo en la Alta California, con el fin de emplearlo en la guerra de independencia; que allí expidió \$ 10 000,000 en bonos, los cuales no pudo realizar y los hipotecó a una casa de comercio. Que se fue a Nueva York a ver si los realizaba, y que allí, excediéndose de sus instrucciones, hizo contratos onerosísimos para la República, haciendo concesión de ferrocarril, de terrenos baldíos, etc., etc., contratos que eran nulos porque no tenía facultades para hacerlos; que el Gral. Sánchez Ochoa emprendió su viaje a California después de expedidos los decretos de 8 de noviembre; que en todas las cartas, que remitía al gobierno, se expresaba duramente contra el Gral. González Ortega; y que cuando, por el abuso de las facultades que le confió el gobierno, se le retiraron los poderes, desconoció al gobierno aliándose con el Gral. González Ortega. Que el gobierno le dio orden de volver al país para utilizar sus servicios en la campaña y que lo desconoció, no obedeciendo la orden y permaneciendo en el extranjero durante toda la guerra hasta concluida ésta, penetró en el país con un nombre supuesto hasta San Luis Potosí.

El gobierno, en virtud de las circulares de 18 de octubre de 65 y de 18 de marzo de 67, que previene que los militares que hayan permanecido en el extranjero sin licencia o sin comisión del supremo gobierno durante la guerra extranjera, sean reducidos a prisión y sujetos a un juicio por el delito de deserción, siendo además

²¹ Secretario de Relaciones, encargado del Ministerio de Gobernación en ausencia del titular.

considerados como cómplices indirectos del enemigo, ordenó al gobernador y comandante militar de San Luis (Potosí), que redujera a prisión al ciudadano Gral. Sánchez Ochoa y lo sujetara a un juicio; que habiéndose negado a informar el Gral. Sánchez Ochoa, sobre las responsabilidades que le resultan por el encargo que tuvo en los Estados Unidos, se suspendieron los procedimientos del juicio y entonces sobrevino la elección.

El gobierno ve la cuestión legal de esta manera. Estando sometido a un juicio el Gral. Sánchez Ochoa, no podía ser electo diputado por estar suspenso en los derechos de ciudadano que cometió faltas, no sólo como comisionado del gobierno, sino también como militar; y que por éstas, cree que bastaba la orden de encausarlo para que surtiera los efectos de mandamiento de prisión, que es una de las causas porque la ley electoral priva del voto activo y pasivo a los mexicanos. La prevención de la ley electoral pudiera referirse a un auto judicial; pero no en negocios militares en que basta la orden superior para declarar preso a un individuo; y sobre todo el gobierno obraba en el círculo de sus facultades extraordinarias en virtud de las cuales podía intervenir en negocios judiciales siempre que no hubiera perjuicio de tercero. Si el Congreso y el país consideran suspenso al Gral. González Ortega en sus derechos de ciudadano, a pesar de su fuero constitucional, respecto del Gral. Sánchez Ochoa, que como militar ha desobedecido al gobierno, la orden de éste surte sus efectos de suspenderle en dichos derechos.

Hay, además de esta cuestión legal, consideraciones muy graves de política. Si la responsabilidad que resulta al Gral. Sánchez Ochoa, fuera de tal naturaleza que pudiera atribuirse a motivos de error o de opiniones políticas, el gobierno no se opondría a la aprobación de su credencial. Algún ciudadano diputado ha dicho al quo habla, que el caso del Gral. Sánchez Ochoa es el mismo que el del ciudadano Prieto y el propio que el del ciudadano Gral. Huerta. Esto no es cierto. El ciudadano Prieto ocurrió al gobierno, preguntándole si podía venir a desempeñar su encargo de diputado; y el gobierno le contestó que no había inconveniente en ello. Pero el ciudadano Prieto no hizo más que desconocer al gobierno declarándose por el Gral. González Ortega y,

además, ni tenía responsabilidad ninguna pecuniaria, ni era militar que había desobedecido las órdenes del gobierno. Respecto del ciudadano Gral. Huerta, es verdad que no obedeció la orden del gobierno; pero cuando éste supo que se presentaba, no quiso oponerse, porque contra él no había las razones que respecto del Gral. Sánchez Ochoa. El ciudadano ministro acabó asegurando que si el gobierno se opone a la admisión en el Congreso del Gral. Sánchez Ochoa no es porque venga a aumentar las filas de la oposición, porque en este caso se hallaba el ciudadano Prieto y no se opuso a su entrada en la Cámara, sino que razones de grande interés público impulsan al gobierno a obrar como lo hace. Cree que los informes que ha dado son bastantes, pero añada que, si omitió algunos, los dará si el Gobierno lo permite.

El ciudadano Zamacona: Ha dicho el ciudadano ministro que los actos del gobierno, respecto del Gral. González Ortega, están aprobados tanto por el país como por el Congreso federal. Como este negocio está declarado de riguroso secreto, no puedo decir el estado en que se halla; pero sí hacer constar que el Congreso no ha dado ninguna decisión sobre el particular. Para resolver el negocio de que se trata, pido a la mesa que se lea otra vez el dictamen de la comisión de poderes para ver si en él están contestados los informes del ciudadano ministro.

El ciudadano Prieto: Pido que se lea una parte de los comprobantes y la comunicación del ciudadano ministro respecto de la elección del ciudadano Sánchez Ochoa.

La secretaría leyó.

El ciudadano Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones: El ciudadano Zamacona ha hecho una rectificación respecto del Gral. González Ortega, la cual creo poder contestar. El ciudadano Zamacona ha dicho que el Congreso no ha resuelto nada tocante a ese negocio. Esto es cierto. Mas yo no he dicho que haya hecho una declaración expresa; pero ha manifestado su conformidad, que consiste en que el 8 de diciembre, día en que se reunió, debió declarar que el ciudadano Juárez debía entregar el gobierno al Gral. González Ortega, como Presidente de la Corte de Justicia, porque si no el Congreso sería cómplice en la violación de la Constitución. Después de la elección de Presidente de la República, pudo

también el Congreso hacer una cosa semejante llamando a (González) Ortega para que se encargara del gobierno, y no haber hecho la declaración de la elección. No lo hizo; luego se debe entender que el Congreso está conforme con que el Gral. González Ortega esté suspenso en sus derechos de ciudadano. De lo contrario, si no lleva adelante el argumento legal, como lo entiende el mismo Gral. González Ortega, ni aun el mismo Congreso sería legítimo representante del país.

Respecto de los documentos, consta en ellos que el ciudadano ministro de la Guerra dio una orden previniendo a la comandancia militar de San Luis (Potosí) que aprehendiera y sujetara a juicio al Gral. Sánchez Ochoa. Ruego al Congreso tenga presente que dicho señor es un militar que se puso en rebelión contra el gobierno y que está comprendido en la ley y circular que he citado.

El ciudadano ministro continuó repitiendo sus observaciones sobre la responsabilidad del Gral. Sánchez Ochoa respecto de su misión a los Estados Unidos, añadiendo que habiéndose dado a luz muchos documentos en que se le hacen cargos muy severos, no los ha contestado teniendo sobrado tiempo para haberlo hecho; y recordando los abusos de los que, desobedeciendo al gobierno, han hecho una carrera, trastornando la paz pública con la esperanza de ser premiados en vez de ser castigados, concluyó deseando que la resolución del Congreso fuera en el sentido de asegurar el prestigio de la autoridad legal.

El ciudadano Zamacona volvió a hacer uso de la palabra rectificando los hechos respecto del Gral. González Ortega, diciendo que tan el Congreso no está conforme con lo que con aquél ha pasado, que hay una proposición pendiente de resolución, sobre la cual no insiste, por estar declarada de sesión secreta.

Respecto del negocio de que se trata, creo que la comisión lo ha resuelto en el sentido legal, que es el que debe dominar y no las consideraciones políticas que se invocan.

El ciudadano Manuel Rojo: Me parece que el dictamen no está firmado por todos los miembros de la comisión. Pido que se lean las firmas y el artículo 66 del reglamento, y después interpelaré al ciudadano

(Rafael) Dondé para que diga por qué no firmó el dictamen, o por qué no presentó voto particular.

El ciudadano (José) Díaz Covarrubias: El dictamen está firmado por los ciudadanos Mercado, Baranda P. y Fernández. Fue leído el artículo 66 del reglamento.

El ciudadano Valle, Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dondé para responder a una interpelación.

El ciudadano (Rafael) Dondé: Voy a manifestar por qué no firmé el dictamen que concluye consultando la aprobación de la credencial de que se trata. He aquí lo que se discute. Si se aprueba, resultará que el Gral. Sánchez Ochoa debe venir al Congreso. Si no se aprueba, el Congreso declarará que no es válida la credencial. Supuesto que no hay término medio, me pareció inútil presentar voto particular. Creo que con esto quedará satisfecho el ciudadano Rojo. Yo no quería tener parte en esta discusión, porque siempre es penoso tratar de cuestiones personales, en que por más que uno esté afectado, debe sofocar sus sentimientos y obrar con imparcialidad. Pero se me ha obligado a hablar, y a pesar mío me veo en la necesidad de explicar por qué disentí del voto de mis compañeros de comisión. Cuando se presentó la credencial de que se trata, varios diputados se acercaron a la comisión y le manifestaron que esa credencial envolvía grandes cuestiones, entre ellas la responsabilidad del Gral. Sánchez Ochoa de que ha hablado el ciudadano ministro. Aunque la ley dice que las denuncias contra las elecciones deben hacerse por escrito, el reglamento da derecho a todos los ciudadanos diputados para tener voz en las comisiones, y la comisión de poderes, en virtud de las indicaciones que le hicieron algunos diputados, pidió informe al gobierno. La asamblea oyó la contestación del ministerio. En virtud de ella, la mayoría extendió el dictamen y yo conservé mi opinión en contra de la credencial, fundado en el artículo 56 de la Constitución. (El orador reforzó los argumentos hechos por el ciudadano ministro de Relaciones, respecto de la suspensión de los derechos de ciudadano en que al tiempo de la elección se hallaba el Gral. Sánchez Ochoa, citando en su apoyo el artículo 8º de la ley electoral y continuó.) El gobierno, en la órbita de sus facultades ordinarias, no podía proceder así contra el Gral. Sánchez

Ochoa; pero en uso del poder extraordinario de que se hallaba investido, pudo muy bien, no sólo dar el auto motivado de prisión, sino imponerle un castigo. Siento haber tomado la palabra en este negocio. No conozco personalmente al Gral. Sánchez Ochoa; sí los servicios que prestó en otra época, pero que están anublados por los cargos que le hace el gobierno. Querría que el Gral. Sánchez Ochoa estuviera aquí porque aquí debía estar en premio de sus servicios. El ciudadano Zamacona ha dicho que en esta cuestión debe dominar el principio legal, pero también la conveniencia política es de mucha importancia, y debe formar parte de nuestro sistema, porque estando el Gral. Sánchez Ochoa acusado por el gobierno de haber hecho contratos ruinosos para el país, los tenedores de los bonos que expidió, al verlo admitido en el Congreso, se apresurarían por esto a hacernos reclamaciones. Debemos tender la mano al amigo, pero advertirle sus faltas a la ley, principio que tenemos que asegurar como representantes del pueblo soberano.

El ciudadano Lozano: Creo que debo votar en pro, y voy a explicar mi voto. No quiero que se crea que éste es de oposición al gobierno ni de absolución al Gral. Sánchez Ochoa. Se debaten dos cuestiones distintas: la legalidad de la credencial y la responsabilidad. El ciudadano ministro acusó de dos faltas al Gral. Sánchez Ochoa: de haber abusado y hecho mal uso de las facultades que le dio para conseguir un préstamo en los Estados Unidos. Los dos abusos son distintos; ¿pero lo absuelve de ellos la aprobación de la credencial? No. La última consideración expuesta por la comisión, es que debe depurar su conducta como comisionado del gobierno y recibir el castigo, si es que lo merece. El ciudadano ministro de Gobernación dice que desea que impere la ley; de la aprobación de la credencial no resulta preocupada la cuestión de la responsabilidad ni el castigo que deba imponerle el tribunal competente, por su conducta como comisionado del gobierno.

Se le acusa de inconsecuencia política, es decir, de haber primero manifestádose en contra y después a favor del Gral. González Ortega. Yo creo que esta inconsecuencia no tiene que ver nada con la credencial. Se le acusa de desobediencia militar a las órdenes del gobierno. Este cargo es muy grave y yo desearía, no sólo que el Gral. Sánchez Ochoa sino que

todos los militares que hicieron como él, recibieran el castigo severo de su falta. Pero ¿es él el único? No me permito más que esa pregunta, porque no quiero formar sobre esto ningún juicio; pero conozco a muchos militares que han permanecido en medio del enemigo, que tomaron las armas a última hora, cuando ya el país se había salvado; y esos militares no han sido repelidos de puestos públicos de importancia. Esta falta no es bastante, según la ley electoral, para reprobear la credencial, y el gobierno tiene expeditos sus derechos legales para que el ciudadano Sánchez Ochoa sea sometido a un juicio. Pudo muy bien suceder que el ciudadano Sánchez Ochoa dudara de si se le llamaba realmente para utilizar sus servicios o para sujetarle a un proceso. Sea de esto lo que fuere, se va a resolver si el ciudadano Sánchez Ochoa es digno o no de ser diputado. De este dilema es necesario concluir una de dos cosas; o nuestras instituciones son viciosas, o el pueblo no está bastante ilustrado para ellas. No me parece, como se ha dicho, que la orden del gobierno, reforzada con las facultades extraordinarias que tenía, importaba un auto de prisión. Enhorabuena que el gobierno haya obrado legalmente hasta el grado de que se constituya juez del ciudadano Sánchez Ochoa, pero no han seguido los procedimientos de un juicio; y si el gobierno pudo ser juez, no debió serlo hasta el extremo de no sujetarse a ninguna regla. He aquí las razones de mi voto, que no tiene ninguna apreciación personal.

El ciudadano ministro de Gobernación: Debo contestar un cargo que aparece contra el gobierno en el discurso del orador que acaba de dejar la palabra. Parece que duda el señor diputado de la realidad del objeto con que fue llamado el Gral. Sánchez Ochoa, y aunque valiéndose de un recurso oratorio, pues dijo que no dudaba de la rectitud y honradez del gobierno, dejó entrever que el Gral. Ochoa pudo ser llamado ostensiblemente para que prestase sus servicios al gobierno, pero en realidad para someterlo a juicio y castigarlo por las faltas cometidas, lo cual excusaría la resistencia de aquel general a obedecer las órdenes del gobierno.

Esta indicación no debe ofender al ejecutivo, porque todos los diputados saben que no ha entrado jamás el engaño en la política de la

administración, pero es conveniente alejar toda duda y cualquiera mala impresión que esto pudiera causar.

Así pues, me veo obligado a indicar en qué tiempo y en qué circunstancias llamó el gobierno al Gral. Sánchez Ochoa, y se convencerá la Cámara de que no estuvo nunca en su ánimo la idea de un acto de perfidia. Cuando tuvo lugar el llamamiento, acababa el Gral. Ochoa de realizar esas operaciones ruinosas de que antes he hablado y no teniendo el ejecutivo ningún motivo de resentimiento de él y atendiendo por otra parte a sus antecedentes y servicios, disculpaba esos mismos actos, creyéndolo equivocado o suponiendo que si bien había traspasado sus facultades voluntariamente esto debía atribuirse al deseo de ser útil a la República. En tal virtud no se pensaba en castigarle, ni había contra él ningún género de prevención. Repito que se pensaba únicamente que el deseo de ser útil a la República, había inducido al Gral. (Sánchez) Ochoa a celebrar aquellas negociaciones, lo cual no es extraño si se atiende a que el gobierno no podía olvidar los importantes servicios prestados a la patria por el Gral. (Sánchez) Ochoa.

Se ve, pues, que no hay motivo para suponer que el gobierno quisiese proceder con mala intención. Y así debe creerse, pues el ejecutivo ha tenido siempre por norte la buena fe. Ha creído que debe proceder con rectitud, cumpliendo siempre con la palabra empeñada, como un medio de obtener los mejores resultados. Además de esto, tiene otro motivo para proceder así; motivo de moralidad, de dignidad, que rechaza todo engaño y toda perfidia. Me refiero al interés público, porque en las dificultades que ocurren en la República, el gobierno puede llamar un jefe cuando las circunstancias lo hagan conveniente y, fiado éste en la palabra del gobierno, vendrá sin cuidado y se allanará así pacíficamente una cuestión que tal vez podría ser de consecuencias muy funestas.

Creo que el reglamento lo permite y así voy a extenderme sobre otros puntos.

El artículo 8o de la ley electoral usa de estos términos (lo leyó). Ciertamente la inteligencia de este artículo es que sólo los poderes judiciales puedan disponer la prisión del reo. No pongo duda en eso; pero la letra del artículo constitucional es que la orden de prisión se expida por

autoridad competente, y el ejecutivo lo era en virtud de las facultades extraordinarias de que estaba investido.

Que ¿podía tampoco necesitar de esas facultades para decretar la prisión de un militar que se revelaba contra su autoridad desconociéndola?

Se ha dicho mucho sobre militares que, estando en el mismo caso del Gral. Ochoa, son atendidos por el gobierno y disfrutan empleos, etc. La contestación es sencilla, en demasía. Esos militares han prestado recientemente algunos servicios, y el Gral. Sánchez Ochoa no. Algunos de esos militares se han hecho acreedores a la benignidad del gobierno, o bien existen razones de política, de conveniencia pública que exigen una conducta semejante por parte del ejecutivo; el Gral. Ochoa, por el contrario, no ha querido dar la menor prueba de que acata la autoridad; no ha considerado al gobierno ni como bandera de unidad para la salvación de la patria; no ha querido siquiera, como ciudadano, contestar a las excitaciones que se le han dirigido para que explique su conducta. Ha dicho que no reconoce el juez y no ha habido por ello procedimiento. Esto lo sabe el Congreso, porque los documentos se han publicado.

Las responsabilidades que ha contraído el Gral. (Sánchez) Ochoa, exigen que no se le dé un asiento en el Congreso, pues si esto mismo ha de declarar el gran jurado en virtud del convencimiento que ha de tener la Cámara, de que esas responsabilidades existen, no veo yo la razón que haya para que se legitime hasta cierto punto parte de lo hecho por el Gral. (Sánchez) Ochoa, admitiéndole entre los representantes del pueblo.

A esto se agrega que esos juicios son dilatados, y que luego viene la estrechez de las amistades, las consideraciones, los miramientos y ese juicio no llega nunca a su fin.

Por otra parte, y para concluir, diré que el Congreso no ejerce solamente las funciones de juez como Congreso o como colegio electoral, pues conserva siempre su carácter de Congreso y no debe entrar en formalidades de poca o ninguna significación, porque eso sería obrar como un juez menor que se detiene en averiguar si una palabra está bien en un papel.

Debo repetir que el gobierno no tiene el menor interés en esta cuestión; que lo guía la moralidad, la energía de la justicia y el deseo de que se establezca en la República el principio de que todos, grandes y pequeños, tienen que someterse a la ley, a la autoridad. Le preocupa también el juicio que se forma de nuestra política en el exterior, y de que los tenedores de esos bonos emitidos por el Gral. Sánchez Ochoa estén pendientes de algo que se los legitime para presentar a la nación enormes reclamaciones. Pero no se crea que la administración tiene el menor interés político, porque aun suponiendo que la influencia del Gral. (Sánchez) Ochoa fuese tanta que arrastrase a la oposición la mayoría del Congreso, ¿qué sucedería? Nada... Caería un ministerio y nada más; mientras que de la otra parte tenemos grandes compromisos y complicaciones para la República.

Y no se diga que hay exageración, que el asunto es insignificante, porque puede referir lo que pasó con el marqués de la Rivera, a quien un ministro decía: "Señor, en México se han cometido grandes faltas, hay desfalcos enormes, etc., y él contestaba: No, no puede ser; es imposible que los mexicanos mismos perjudiquen su país."

El ciudadano Silíceo: Desgraciadamente es verdad lo que acaba de decir el ciudadano ministro. Hay personas que creen, porque se encuentran altas, que no tienen jueces ante quienes rendir cuenta de su conducta. La historia de nuestra vida política nos lo dice bien claro, y si venimos a la contemporánea, encontraremos también ejemplos palpitantes de esa verdad.

Bajo dos puntos diferentes vio la cuestión el ciudadano ministro en su primer discurso: bajo el punto de vista político, y bajo el de la legalidad. En ambos la colocaré yo también para demostrar que no hay vicio de nulidad en la credencial del ciudadano Gral. (Sánchez) Ochoa. El gran punto de legalidad está en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

A todo criminal se le manda prender y después que existe una semiprueba, es que se decreta su prisión. Es entonces que pierde los derechos de ciudadano, pues el estar privado de su libertad un individuo, no quiere decir que haya perdido sus derechos, pues es necesario que se

haya decretado su prisión por juez competente. Se ve, pues, que bajo el punto legal, debe admitirse la credencial.

Se ha invocado cuáles son los casos en que se pierden los derechos de ciudadano y qué ley llena ese vacío. La ley que determine esos casos, ha de ser una ley orgánica, y como éstas no puede dictarlas sino el Congreso, yo no creo ni puede creer nadie que las facultades concedidas al ejecutivo *se* extendiesen a tanto. El ejecutivo, pues, no pudo reglamentar la Constitución como se pretende.

Pasando a la cuestión política, yo me permitiré decir que no sé por qué pueden ser inconvenientes, para aprobar la credencial, las responsabilidades que afectan al Gral. (Sánchez) Ochoa por los contratos que celebró en los Estados Unidos y por no haber concurrido al llamamiento del gobierno. En la Cámara se le puede juzgar como lo previene la Constitución. Yo creo que el giro que se ha dado a este asunto para explicar la necesidad de la desaprobación que se pide suena mal en los labios de un ministro. Estar en el Congreso no es estar fuera de la ley. Todos los que nos encontramos aquí somos responsables de nuestros actos, y podemos ser juzgados en el caso de cometer una falta de cierto género y gravedad. Pero dice el ciudadano ministro que habrá demoras. Señor, este es un argumento que suena muy mal en un hombre de Estado, porque equivale a que la policía al apoderarse de un criminal, dijera: "no debemos llevarlo a la justicia porque hay muchos trámites que seguir y se hace muy dilatado el castigo; matémosle aquí mismo." ¿Puede concebirse esto en un hombre de Estado? Aunque el crimen se quedase impune, yo me pronunciaría contra un principio semejante.

Pero ¿bastan acaso las apariencias para condenar a un hombre? Entonces ¿a qué la secuela de los juicios, para qué las causas atenuantes?

Yo invoco no sólo el buen juicio de la Cámara, sino su rectitud para que se sirva aprobar el dictamen que se discute.

El ciudadano Montes: Voy a decir solamente cuatro palabras; pero antes suplico a la secretaría se sirva dar lectura a los artículos que fijan las causas porque pueden declararse nulas las elecciones. Después seguiré haciendo uso de la palabra.

La secretaría leyó los artículos 54 y 55 de la ley electoral.

El ciudadano Montes: Sírvase leer el artículo 8°. Se leyó.

El ciudadano Montes: Es grave cosa que pese sobre un diputado la pena de haber emitido su voto contra la ley. Como veo que se extravía la cuestión, me siento obligado a reducirla a sus términos más breves; pero antes debo manifestar que no conozco al Gral. Sánchez Ochoa, que no tengo ni agravio contra él y que por mi carácter complaciente quisiera que se honrara ocupando un asiento en esta asamblea; pero ante todo soy diputado de la nación y el deber me obliga a subordinar mis sentimientos a los mandatos de la ley.

La cuestión es ésta: ¿Puede el que está suspenso en los derechos de ciudadano ser electo diputado? ¿Lo estaba el Gral. (Sánchez) Ochoa cuando recayó en él la elección? He aquí lo que debemos examinar. Prescindo de sus antecedentes; tampoco me ocuparé de su conducta en los contratos que celebró en los Estados Unidos; todo eso es enteramente extraño a la cuestión.

El gobierno llevó su complacencia y su acatamiento a las formas hasta un grado muy exagerado, porque la inmunidad de un diputado principia el día de su elección y termina con el periodo para que fue electo. Si antes se ha cometido un delito, los tribunales comunes deben conocer de él. Yo por lo menos, si hubiera sido Ministro, así lo habría determinado.

Ve, pues, el Congreso que por unos documentos leídos hace poco a solicitud de un diputado, la orden de reducir a prisión al Sr. Sánchez Ochoa, fue expedida por el ejecutivo antes de que aquél fuese electo Diputado. ¿Cuáles son los efectos de esta orden? Obrar las autoridades dentro de sus límites y no invocar la Constitución.

No hay que olvidar tampoco que desde el 7 de junio de 1861 algunas de las garantías constitucionales estaban suspensas. Pido a la secretaría se sirva leer el artículo 21 de la Constitución y los decretos sobre facultades concedidas al ejecutivo. Seguiré después haciendo uso de la palabra.

El ciudadano Alcalde, secretario: Las leyes sobre facultades se mandan buscar a la secretaría. El artículo 21 de la Constitución dice así: (lo leyó).

El ciudadano Montes: Doy mi palabra de honor de que las garantías que se suspendieron, son las siguientes; (las enumeró). Estoy seguro de ello y debe creérseme bajo mi palabra de honor.

Pues bien, en el periodo de esa suspensión de garantías no estuvo vigente el artículo 21 de la Constitución. Hoy sólo puede imponer penas la autoridad judicial, pero entonces era facultad también del ejecutivo imponerlas.

Ahora bien, la prisión que sufre un individuo durante la secuela del juicio es una pena, puesto que en muchos casos decretan los jueces que se dé por compurgada la falta con la prisión sufrida, o bien se le manda abonar esa prisión en otra mayor. Es, pues, pena verdadera. ¿Podía el ejecutivo imponer pena en 1867? La Constitución lo resuelve en su artículo 21; luego el gobierno podía imponer prisión. Esto es lo que ha sucedido. Votar en favor del dictamen no es obsequiar la ley electoral o que se diga que los que lo hagan en contra como yo vamos a pisotear las leyes.

Yo respeto las opiniones de todos porque me parece que todas reconocen un buen deseo. Todos tienen conciencia y no hay razón para suponer que no obren de acuerdo con ella.

Del expediente consta que el ejecutivo, por medio del ministerio de la Guerra, dio la orden de prisión. Por consiguiente, los que voten en contra del dictamen lo harán en pro de la ley, que es todo lo que se debe desear.

El ciudadano Alcalde, secretario: Habiendo sonado la hora de reglamento, varios diputados se han acercado a la mesa pidiendo que se prorrogue la sesión hasta la resolución del negocio que se discute y el ciudadano Mata ha pedido la lectura del siguiente artículo decisivo que lo previene así. (Lo leyó.)

El ciudadano Montes: Pido que se lea el artículo 60 de la Constitución. Hoy obramos como Congreso y no como colegio electoral.

Se leyó.

El ciudadano Alcalde, secretario: ¿Continuará la sesión o se suspende para continuarla mañana? La Cámara resolvió que continuaba.

En consecuencia, la mesa concedió la palabra para un hecho al ciudadano Lozano, que dijo:

Lozano: El Sr. Montes, examinando la cuestión en el terreno legal, preguntó si pueden los suspensos en los derechos de ciudadano ser electos diputados y contestó que no: yo tengo el gusto de ser de su opinión. El Sr. Montes preguntó también si encontrándose el Sr. Sánchez Ochoa preso cuando se le eligió diputado, era válida su elección. El Sr. Montes contestó que no y me parece que su opinión en el presente caso no es acertada.

Dice el Sr. Montes que, aunque sólo las autoridades judiciales pueden imponer penas, el ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias de que estaba investido, podía imponerlas también. Ya dije que concedía hasta que el ejecutivo se erigiese en juez. Pero no estoy de acuerdo en que la prisión impuesta al que se está juzgando, pueda considerarse como pena.

El ciudadano Valle, Presidente: El Sr. Montes se ha acercado a la mesa para manifestar que su nombre no es el que está en discusión, sino el dictamen.

El ciudadano Lozano: No me ocupo de su persona sino de sus opiniones.

El ciudadano Valle, Presidente: El orador puede continuar.

El ciudadano Lozano: Seré breve, señor. Se toma desgraciadamente el hecho por el derecho, pues es sólo un hecho que se castigue antes de pronunciar sentencia, que es la que puede imponer penas. Pero en mi concepto ese no es el buen derecho y aquí no debemos referirnos sino a él.

Ahora refiriéndome al objeto con que pedí la palabra debo protestar al ciudadano ministro que mi ánimo no ha sido presentar una duda que tampoco puedo abrigar, respecto del gobierno y mis palabras deben tomarse, no como recurso oratorio sino como las dije y por lo que representan.

El ciudadano Alcalde, secretario: La aprobación de una credencial, es materia económica. Han hablado tres diputados en pro y tres en contra y se pregunta si el dictamen está suficientemente discutido.

La Cámara declaró que sí.

El ciudadano Alcalde: Se pregunta si se aprueba en votación nominal, pedida por el ciudadano Condés de la Torre.

A petición del ciudadano Dondé se dio lectura al artículo 103 de la Constitución.

El ciudadano secretario Díaz Covarrubias hizo presente a la Cámara que la proposición con que termina el dictamen, estaba en sentido afirmativo.

Se procedió a la votación y resultó rechazada la credencial del ciudadano Gral. Gaspar Sánchez Ochoa, por 79 votos contra 32.

Se levantó la sesión.

Pantaleón Tovar

MATÍAS ROMERO INTERPELADO POR EL CONGRESO

Crónica parlamentaria de la sesión del día
5 de marzo de 1868

Presidencia del ciudadano José María Iglesias

.....

El ciudadano Iglesias, presidente: Continúa la discusión sobre la ley de clasificación de rentas. Tiene la palabra para informar el ciudadano ministro de Hacienda.

El ciudadano ministro de Hacienda: Cuando el señor diputado Zamacona me dirigió antier una interpelación sobre tres puntos distintos, era ya una hora muy avanzada de la tarde, en que el Congreso manifestaba deseo de terminar su sesión y por estar distraído en el momento que el Sr. Zamacona me dirigía la palabra, no comprendí que deseaba oír mis respuestas para continuar su discurso, sino que me pareció que había terminado ya, y que, por lo mismo, era más conveniente que contestara yo a sus interpelaciones cuando usara de la palabra, para hablar sobre el dictamen de la mayoría de la primera comisión de Hacienda que ha dado origen a este debate. Después comprendí que el Sr. Zamacona deseaba oír mis informes para continuar su discurso; y aunque no puedo tomar su deseo por el deseo de la Cámara, y aunque me parece también que los informes que pide no tienen una conexión directa con el asunto que se discute, no queriendo que mi silencio se atribuya a que pretendo ocultar algunos de los actos del gobierno, paso desde luego a dar el informe pedido.

Dos de los tres puntos que comprende la interpelación del Sr. Zamacona han ocurrido después de mi entrada al ministerio de Hacienda;

el tercero es anterior y si hubiera yo tratado de contestar antier, habría dicho solamente que no sabía nada respecto de él. Al regresar en ese mismo día al ministerio de Hacienda, pedí los antecedentes y supe que el gobernador del estado de Coahuila se quejaba de que las importaciones de la aduana de Piedras Negras habían disminuido muy considerablemente, mientras que las que se hacían por las aduanas fronterizas de Chihuahua y la de Nuevo Laredo aumentaban cada día más; que tratando de averiguar la causa de esto, se le había dicho que el gobierno había concedido una rebaja de derechos a los efectos que se importaran por aquellas aduanas, y que con objeto de nivelar el comercio por la frontera deseaba se concedieran iguales exenciones a la aduana de Piedras Negras. Pedí informe a la sección respectiva del ministerio y se me dijo que no había más concesión que una hecha el 12 de mayo de 1866 a una línea de diligencias establecida entre la ciudad de Chihuahua y San Antonio Béjar, para que importara libre de derechos algunos artículos y con la mitad de los derechos establecidos por el arancel otros, y para que exportara libre de derechos plata y oro. Esta concesión fue hecha por dos años que terminarán el 12 de mayo próximo. Poco después de mi entrada al gabinete, recibí una solicitud del empresario de dicha línea para que se extendiera el tiempo de la concesión, que fue contestada desde luego, diciéndole que no podía accederse a ella por haber cesado las facultades legislativas del gobierno.

Ayer mismo tomé el acuerdo del Presidente sobre el negocio promovido por el gobernador de Coahuila y la determinación del ejecutivo se le comunicó en la nota que suplico a la c0ámara me permita leerle.²²

Como verá el Congreso, esta determinación es decisiva y resuelve todas las dudas que pudiera haber.

Después de hecho lo que he referido, se me dijo, por personas que acompañaron al gobierno durante su permanencia en Chihuahua, que el gobernador de aquel estado había solicitado, por motivos más o menos

²² Leyó una comunicación al gobernador de Coahuila y otra al administrador de la aduana de Piedras Negras que a continuación se transcriben

fundados, que se permitiera a la importación de efectos por las aduanas de Chihuahua con una rebaja considerable de derechos y que el gobierno había creído conveniente acceder a esto. Como verá el Congreso, la determinación que acabo de leer revoca ésta o cualquiera otra concesión que el ejecutivo hubiere hecho anteriormente.

Los otros dos puntos comprendidos en la interpelación del Sr. Zamacona son la descarga de la barca inglesa *Coquette* en diciembre último en el puerto de Guaymas, con una rebaja de derechos y la protesta de algunos comerciantes de Coahuila contra el pago del 15% de ferrocarril. El primer asunto me ocupó en el momento de entrar en el ministerio. El gobernador del estado de Sonora comunicó oficialmente que una persona del comercio de Guaymas, que decía había prestado muy buenos servicios a la causa nacional, tenía créditos contra el gobierno, que aseguraba no era posible reembolsarle de otro modo; había llegado un cargamento y había creído conveniente, por estos y otros motivos, permitirle que lo introdujera, pagando con los referidos créditos el 40% de los derechos. El gobierno determinó desde luego desaprobando, en los términos más enérgicos, la conducta del gobernador de Sonora, mandó cobrar el total de los derechos y dispuso que los efectos desembarcados no se recibieran como nacionalizados en las demás aduanas del Pacífico, sino después de que se hiciera constar que habían pagado el total de los derechos de arancel. Aún no se recibe la respuesta a estas comunicaciones.

Por lo que hace a la protesta de los comerciantes de Colima, debe decir a la Cámara que el administrador de la aduana del Manzanillo, por ignorancia, por timidez o por otros motivos que no aparecen suficientemente explicados en el expediente, dejó de usar de las facultades económico-coactivas que le concede la ley para hacer el cobro del 15% del ferrocarril y sometió el asunto al juez de distrito. Luego que el gobierno tuvo conocimiento de estos hechos, desaprobó la conducta del administrador de la aduana, lo mandó suspender temporalmente de su empleo y dio instrucciones al contador para que exigiera, sin excusa ni pretexto, el cobro de los referidos derechos, mandando retirar el negocio del juzgado de distrito por no ser contencioso.

Por lo expuesto se verá que el gobierno no ha autorizado la infracción de ninguna ley, sino que, por el contrario, se esfuerza, como el que más, en el puntual cumplimiento de todas y tiene el mayor empeño en que ingresen al erario federal las rentas que le corresponden, en que no se desnivele el comercio con perjuicio de los negociantes de buena fe y en corregir con mano de hierro todos los abusos de que tenga conocimiento. Si el Congreso deseara mayores informes sobre estos puntos, podré leerle las comunicaciones oficiales que tengo conmigo y que manifiestan detalladamente cuanto ha ocurrido respecto de cada uno de ellos.

El ciudadano Zamacona: La hora de reglamento interrumpió anteayer mi discurso cuando acababa de observar en la mesa un movimiento de esos que preceden a un llamamiento al orden.

Hubo acaso en la mesa quien creyera que había abandonado la cuestión y debo por lo mismo comenzar hoy, estableciendo que las consideraciones que tuve ayer el honor de exponer ante el Congreso y las que hoy me propongo desarrollar entran perfectamente en los límites del debate que ha dado lugar el proyecto sobre clasificación de rentas. Este proyecto y su defensa, se ha dicho, son un medio de oposición y tienden sólo a dejar el gobierno en la impotencia de marchar. Convenía, pues, probar que el proyecto y su defensa no son más que una aspiración de orden y que la oposición en la Cámara no tiene miras negativas reducidas a debilitar y desorganizar, sino tendencias orgánicas y patrióticas. Los autores y los defensores del dictamen han tenido que fijarse en los clamores de un estado digno de servir de modelo a los otros de la federación, no sólo por el orden y economía de que da muestras su gobierno, sino por las miras inteligentes y profundas que le han inducido a pretender que las rentas federales y las de los estados se coloquen sobre una base sólida y en armonía con las instituciones. Entre esta iniciativa racional y el sistema de promiscuidad y semicentralización que parece quieren perpetuar el ministerio y sus patronos en la Cámara no puede vacilarse; y esto, y no la idea de crear dificultades al gobierno, nos hace apoyar la iniciativa de Zacatecas que debe corresponder a una necesidad muy general de los estados, pues que la han apoyado más de diez

Legislaturas. Lo que he dicho prueba que no son fuera del caso mis observaciones de antier.

Tuve que interrumpirlas cuando me preparaba a contestar otro de los principales argumentos que he oído en boca de los oradores que han impugnado el dictamen.

Las rentas federales, han dicho, bastan hoy apenas para cubrir los gastos de la federación. Cercenarlas es tanto como crear un déficit. Ya he dicho que este argumento estaría bien colocado al tratar la cuestión del presupuesto, pero de pronto debe observarse que el importe actual de los recursos y de los gastos no debe tomarse como dato para la clasificación de rentas, porque los recursos han disminuido y las atenciones aumentado por una circunstancia accidental y transitoria, y es la política del actual ministerio.

A demostrarlo se encaminaban las interpelaciones que me he tomado la libertad de hacer al señor secretario de Hacienda. Acaba de decirnos que hay una concesión en favor de la empresa de diligencias para introducir, punto menos que con absoluta exención de derechos, todas las mercancías que quepan en los carruajes de su servicio; nos dice también que según sus noticias verbales hay autorización para una rebaja considerable de derechos en las aduanas fronterizas de Chihuahua; presentando como poco importantes por su carácter excepcional esas concesiones cuando cabalmente, por ser excepcionales, producen desequilibrio y trastornan el comercio, y aún comprometen la paz pública, como lo demostraré cuando me refiera a la situación de Sinaloa. El señor ministro añade que en efecto se ha importado de Guaymas el cargamento de dos buques con rebaja de un 45% de derechos y que el Gobierno ha desaprobado este acto, previniendo que se cobre la parte remitida.

No explica, sin embargo, si esta prevención se ha llevado a efecto, ni mucho menos podrá decirnos que se haya cumplido con la ley de 17 de agosto del año pasado conforme a lo cual, en casos como éste, debe hacerse irremisiblemente efectiva la responsabilidad de los funcionarios que hayan invadido las rentas federales. La condescendencia con el gobernador de Chihuahua, el disimulo con la autoridad local de

Guaymas, no vienen sino del sistema político del ministerio, que tiende a procurarse agentes sumisos y agradecidos en los estados, aunque sea a trueque de sacrificar los principios fundamentales de la buena administración y las garantías de la paz. Y hablo de la paz, porque en los graves disturbios de la Sinaloa ha tenido rechazo la importación de efectos hecha abusivamente en Guaymas. Esas mercancías han venido a Mazatlán como un elemento de ruinoso concurso para el comercio de aquel puerto y los intereses de éste que siempre han entrado en juego en las revoluciones de Sinaloa, se han combinado con el descontento político, buscando una oportunidad de establecer el nivel con los importadores por Guaymas. He aquí cómo la falta de energía para hacer cumplir las leyes fiscales está teniendo por efecto el trastorno que sufre el orden público en nuestra costa occidental. En el caso acontecido en Manzanillo, el señor ministro de Hacienda confiesa que ha habido un abuso de los que tendió a cortar la ley de 17 de agosto, y sin embargo, no se ha aplicado esta ley, puesto que no se ha hecho efectiva la responsabilidad de los culpables. Tenemos patente en estos tres casos la razón por qué son estériles para el gobierno federal las aduanas marítimas del Pacífico, y explicado cómo el sistema del ministerio que lo subordina todo a la mira de conquistar en los estados cierto ascendiente personal, está rebajando en una suma considerable los recursos reales de la federación.

He dicho también que la política del ministerio está aumentando la importancia del presupuesto general. La partida más gruesa de éste es la que se refiere al ramo de guerra y esta partida ha llegado a una elevación ruinoso por las necesidades ficticias que en el orden político ha creado la administración. México no puede ni debe mantener un ejército de 20 000 hombres; pero hoy los necesita para apuntalar los gobiernos impopulares que bajo el patrocinio del ministerio han surgido en algunos Estados. Nosotros debemos crear rentas para dotar el gobierno económico que corresponde a la índole de nuestro sistema; para dotar un poder que gobierne con la opinión, no sobre la opinión; para expensar los gastos federales y no la política extraviada y dispendiosa de un gabinete que toma como único elemento de gobierno la influencia individual de las

personas que lo forman. Cuando la nave va con la corriente, no gasta mucha leña la máquina de vapor. No son recursos lo que ha menester el gobierno federal; lo que le falta es sinceridad democrática, espíritu de orden y de economía y esto, por desgracia, no podemos crearlo ni votarlo nosotros. El Presidente es quien puede crearlo en derredor suyo, mediante la buena elección de sus consejeros oficiales.

El ciudadano Matías Romero, ministro de Hacienda. Deseando el Presidente manifestar al Congreso el empeño que toma en las deliberaciones de esta Cámara, y con especialidad en el debate que ha dado lugar al proyecto de ley propuesto por la mayoría de la 1ª comisión de Hacienda, me ha encargado que venga yo al seno de la asamblea a manifestar la opinión del ejecutivo sobre este importante asunto. He pedido ya la palabra y cuando me llegue mi turno hablaré sobre el punto principal. Por ahora voy a concretarme a hacer algunas observaciones al discurso que acaba de pronunciar el Sr. Zamacona.

Con peligro de salirnos de la cuestión y temor de ocupar, con incidentes inconexos, la atención de la Cámara, debo rectificar varias de las apreciaciones del Sr. Zamacona. No me ocuparé de sus apreciaciones políticas, porque esto no tiene nada que ver con la cuestión pendiente, porque no me corresponde a mí defender la política del gobierno y porque consiento gustoso dejarla sin comentarios al buen juicio de la Cámara.

Asegura el Sr. Zamacona que el gobierno no ha cumplido con la ley de 17 de agosto de 1867, que manda hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios que usen de las rentas federales sin la autorización del gobierno. El administrador de la aduana de Guaymas, cumpliendo con su deber, se separó de la aduana para no autorizar con su presencia los procedimientos ilegales del gobernador de Sonora. ¿Podría, pues, procederse contra él? La responsabilidad toda era del gobernador del estado y el Congreso sabe muy bien que este funcionario no depende del gobierno federal. ¿Habría sido prudente proceder desde luego contra él, sin darle lugar a que, recibiendo la desaprobación de su conducta, volviera sobre sus pasos y remediara el mal causado? El gobierno espera que lo hará así y si cuando recibiere su respuesta resultare otra cosa,

tendrá tiempo de proceder de la manera que lo crea conveniente. ¿Ha habido pues en esto alguna infracción de la ley por parte del gobierno?

El Sr. Zamacona parece creer que los últimos sucesos desagradables de Mazatlán se deben a la introducción en aquel puerto de las mercancías llevadas a Guaymas por la barca *Coquette*. Creo que en eso también se equivoca, pues de informes fidedignos que he visto de Mazatlán, que no sería propio referir ahora, aparece que aquellos desgraciados acontecimientos han tenido lugar precisamente para llevar a cabo una cosa semejante a lo que pasó en Guaymas: las autoridades constitucionales de Sinaloa no se prestaron a permitir la entrada de efectos con rebaja de derechos y se cree que las que las han sustituido podrán autorizar ese procedimiento ilegal.

Lo ocurrido en el Manzanillo es enteramente distinto del caso de Guaymas: allí el administrador de la aduana declaró contencioso un asunto que era meramente administrativo; se ha desaprobado su conducta y se le exigirá la responsabilidad con arreglo a las leyes. ¿Hay en esto alguna infracción de la ley de parte del gobierno?

Creo que el Sr. Zamacona da más importancia, de la que tiene, a la concesión hecha por el gobierno en Chihuahua a la línea de diligencias del Sr. Maseyra. Cuando se hizo ésta, estaba el gobierno aislado en el estado de Chihuahua, sus comunicaciones todas con el resto de la República pasaban por los Estados Unidos. Me consta que a Washington me enviaban la correspondencia para los jefes y autoridades nacionales de los estados del Pacífico, del centro, de oriente y aún del Golfo y que yo recibía en aquella ciudad toda la correspondencia de los mismos jefes y autoridades dirigida al gobierno. En estas circunstancias apareció el Gral. Escobedo en el estado de Nuevo León con una fuerza respetable, que después se llamó ejército del norte y que debía contribuir muy poderosa y eficazmente al triunfo de la causa nacional. El gobierno creyó entonces que debía hacerse cualquier esfuerzo por ponerse en comunicación con los estados de Coahuila y Nuevo León, y a fin de conseguir este objeto no pudiendo dar una subvención pecuniaria hizo la referida concesión. Yo creo que las circunstancias lo justifican ampliamente, aunque no se tomara en consideración el que, en la fecha

en que se otorgó, el estado de Chihuahua estaba enteramente incomunicado del resto de la República y que convenía fomentar de esa y otra manera las importaciones, sin que esto pudiera de ningún modo desnivelar el comercio, ni perjudicar a los negociantes de buena fe.

Por lo que hace a la concesión que se hizo para que se permitiera la importación de efectos por las aduanas de Chihuahua, con rebaja de derechos, debo manifestar al Congreso que, según los informes que tengo de personas fidedignas, algunas de las cuales nos han pertenecido al gobierno, dicha concesión se hizo, no por consideración personal al gobernador de aquel estado, como parece creerlo el Sr. Zamacona, sino porque en aquellas circunstancias se consideró equitativo y conveniente. Se manifestó entonces al gobierno que la distancia a que está Chihuahua de los puntos por donde pudieran hacerse las importaciones, la dificultad de los caminos, la travesía del desierto y otros motivos, hacían casi imposible el que pudieran importarse efectos pagando todos los derechos del arancel. Estas consideraciones, que podrían justificar la determinación que entonces se tomó, han cesado ya; yo no vengo aquí a pedir al Congreso que ratifique la concesión, he manifestado por el contrario que ayer mismo circulé órdenes terminantes que la harán cesar desde luego; mi objeto es sólo explicar los motivos que hubo para concederla a fin de que no se atribuya a consideraciones personales o de favoritismo, que estoy cierto no influyeron en el ánimo del Presidente al decretarla.

El ciudadano Zamacona: Lo que acaba de oír la Cámara basta para que comprenda que el gobierno ni ha hecho todo lo que debía y que a su sistemático disimulo se debe la esterilidad de nuestras rentas en la costa del Pacífico. El artículo 6º de la ley de 17 de agosto se expresa en estos términos: "se hará irremisiblemente efectiva la responsabilidad en que incurran las autoridades y funcionarios de cualesquiera clase y categoría, que cometan el atentado de que se trata." ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Que no habrá remisión en exigir la responsabilidad, y el gobierno, en vez de hacerla efectiva, se limita a esperar que los perpetradores del atentado se enmienden y se conviertan con sólo una nota de desaprobación. Si las autorizaciones acordadas para las aduanas

de las fronteras, son o no trascendentales, díganlo los ocursos del gobierno de Nuevo León y las quejas de los periódicos de aquel estado, por nulidad a que ha quedado reducida la aduana de Piedras Negras. Ahora, es muy de notarse que en negocios en que el gobierno debía ser todo actividad y vigilancia, las órdenes que ha expedido lleven fecha de ayer y que haya sido preciso que los abusos que se desaprueban hoy, hayan provocado el clamor de los periódicos de la frontera y hayan tenido un eco en la tribuna parlamentaria.

El ciudadano Presidente manifestó que habiendo llegado la hora de la sesión secreta, se suspendía la discusión, pero que, antes de levantar la sesión pública, se iba a dar lectura a una nota del ejecutivo que se acababa de recibir.

En ella se transcribe un telegrama del gobernador de Jalisco, participando haber descubierto una conspiración de grave importancia y consultando si debía juzgarse a los culpables con arreglo a la ley de 6 de diciembre o a la de 25 de enero de 1862. Con este motivo, el ejecutivo hace algunas reflexiones y concluye sometiendo al Congreso por acuerdo unánime del gabinete la iniciativa siguiente:

"Se declara vigente, entretanto el Congreso no la derogue, la ley de 25 de enero de 1862."

El ciudadano Iglesias, presidente: A la comisión primera de gobernación.

El ciudadano Zamacona: Pido la palabra. Este negocio debe pasar a la comisión de Puntos Constitucionales, puesto que se trata de suspender una gran parte de las garantías que concede la Constitución.

El ciudadano Iglesias, presidente: El ciudadano Zamacona debe manifestar si reclama el trámite dado por la mesa.

El ciudadano Zamacona: Sí lo reclamo y para fundar mi reclamación suplico a la secretaría se sirva leer el artículo 6º de la ley de 25 de enero de 1862. (Se leyó.)

El ciudadano Zamacona continúa: Lo que el gobierno inicia es la suspensión de garantías, y una suspensión no franca, explícita y detallada como se ha hecho otras veces sino envuelta en una declaración indirecta y general. Siempre que se ha tratado en el de suspender las garantías, el

negocio ha pasado a la comisión de Puntos Constitucionales. Ya que se trata de interrumpir el orden constitucional, apenas restaurado, que se proceda con toda circunspección y que no se saque el asunto de la inspección de las comisiones bajo cuya competencia cae naturalmente. Consideremos, señores, que no se trata de garantías, no sólo para los conspiradores de Guadalajara, sino de garantías para todos los ciudadanos porque el único modo con que les será posible estar al abrigo de una acusación injusta, es probar su inocencia por los medios que concede la Constitución. En nombre de los 40,000 ciudadanos que hablan por mi boca, pido que este gravísimo negocio no se trate de una manera excepcional y abortiva sino que conforme a la razón y a la práctica pase a la comisión de Puntos Constitucionales.

El ciudadano Alcalde: Suplico a la Cámara se sirva aprobar el trámite dado por la mesa. Cuarenta mil ciudadanos también hablan por mi boca y en su nombre pido que se apruebe el trámite. Cuando el ministerio de Justicia pidió que se declarase vigente la ley de 25 de enero, pasó el negocio a la primera comisión de Justicia y entonces no se hizo reclamo alguno. Si el celo que se muestra hoy es puramente constitucional ¿cómo no se dio pruebas de ello cuando este mismo asunto pasó a la comisión de Justicia, porque lo había iniciado el ministerio de Justicia, así como hoy se manda pasar a la de Gobernación porque lo inicia el ministerio del ramo?

Pero sobre todo. ¿Qué tiene que ver la comisión de Puntos Constitucionales con que se examine si está o no vigente una ley? Si se tratase de dictar otra nueva comprendo que sí debía pasar a la comisión de Puntos Constitucionales; pero se trata, señor, de una ley que está vigente porque no ha sido derogada. No ha mucho que el ciudadano Frías y Soto ha presentado una proposición para que se derogue y a nadie se ha ocurrido contestar que está derogada. Yo estoy y estaré siempre porque se derogue esa ley, pero mientras no se haga, es necesario convenir en que está vigente... Y tan vigente está, que si yo fuera gobierno mandaría juzgar a los conspiradores con arreglo a ella sin consultar a nadie. Por todas estas razones, suplico a la Cámara se sirva apoyar el trámite dado por la mesa.

El ciudadano Díaz Covarrubias, secretario: ¿Está suficientemente discutido el punto?

Lo está.

El ciudadano Prieto: Pido que la votación sea nominal.

La Cámara declaró que subsista el trámite de la mesa por 64 votos contra 47.

Pasó, pues, el negocio a la comisión de Gobernación.

Se levantó la sesión pública, para entrar en secreta de reglamento.

Pantaleón Tovar

MATÍAS ROMERO DA AMPLIA EXPLICACIÓN AL
GOBERNADOR DE COAHUILA

Ciudadano gobernador del estado
de Coahuila de Zaragoza
Saltillo

Se ha impuesto el ciudadano Presidente de la comunicación que el gobierno de este estado ha tenido a bien dirigir a esta secretaría con fecha 5 del próximo pasado febrero, en la que manifiesta que las importaciones de mercancías por la aduana fronteriza de Piedras Negras, han venido a una decadencia tal que casi ya no se hacen ningunas, atribuyendo esta paralización como causa única a que por las aduanas fronterizas del estado de Chihuahua y por la de Monterrey y Laredo, sólo se cobra el 2% de los derechos que impone la ordenanza general, manifestando, sin embargo, que ese gobierno no tiene la certeza de que tal procedimiento sea cierto; concluyendo con solicitar de ese gobierno, que si ha concedido a dichas aduanas un privilegio semejante, se haga extensivo a Piedras Negras.

El hecho que se refiere no ha llegado antes de ahora a conocimiento de esta secretaría, y quizá el privilegio de la zona libre de que disfrutaban las poblaciones fronterizas, sea el que haya motivado la decadencia de Piedras Negras; pero de todos modos debo decir a usted, por acuerdo del ciudadano Presidente, que el gobierno general no ha autorizado la rebaja de derechos a que se refiere la comunicación que me ocupo de contestar; y antes por el contrario, con distintos motivos, ha prevenido a las aduanas y especialmente a las de la frontera del norte la estricta y fiel observancia de las prevenciones de la ordenanza general y cobros de derechos que ella señala; supuesto que desde la instalación del soberano Congreso, el ejecutivo no ha podido conceder dispensa de ley

alguna, a lo cual equivaldría el rebajo de los derechos de arancel, por carecer de facultades para ello.

Debo manifestar a usted que con fecha 12 de mayo de 1866, el gobierno revestido de amplias facultades hizo algunas concesiones a una línea de diligencias que se estableció entre Chihuahua y San Antonio Béjar, permitiéndole introducir los efectos que pudiera traer en dos carruajes ligeros destinados al transporte de pasajeros, pagando por algunos la mitad de los derechos establecidos y por otros ningunos; pudiendo a la vez exportar del mismo modo algunos caudales pagando por ellos la mitad de los derechos, esta concesión se hizo por el término de dos años que se vencen en 12 de mayo próximo y aunque el gobierno, por razón de las circunstancias y del interés con que ve el establecimiento de nuevas vías de comunicación, pudo entonces haber hecho mayores concesiones, se limitó a aquello que no podía perjudicar de un modo notable al comercio de buena fe, ni desnivelar sus intereses ni los de las poblaciones inmediatas, y a pesar de estas y otras consideraciones, el mismo gobierno ha declarado con fecha 17 de enero anterior que no podía tomar en consideración las razones aducidas en un ocurso del empresario de dicha línea, en que solicitaba una prórroga de la concesión, por carecer ya como se ha dicho de facultades legislativas.

Con motivo de la comunicación de ese gobierno, se pide el informe respectivo a los encargados de las aduanas fronterizas situadas en el estado de Chihuahua y a la de Nuevo Laredo, previniéndoles a la vez que, cumpliendo con las leyes vigentes, no hagan rebajo de ninguna especie en los derechos establecidos por la ordenanza y leyes vigentes, lo cual será caso de grave responsabilidad.

Todo lo que de orden suprema digo a usted, en respuesta de su citada comunicación.

Independencia y Libertad. México, marzo 4 de 1868.

(Matías) Romero

ENÉRGICA INSTRUCCIÓN DE MATÍAS ROMERO A DOS
ADUANAS

Ciudadano administrador de la aduana fronteriza
de Paso del Norte y de N. Laredo

En virtud de comunicación oficial que ha dirigido a este ministerio el gobierno del estado de Coahuila, con fecha 5 del mes próximo pasado, en que dice que sabe que en esa oficina del cargo de usted se hace el cobro de los derechos que impone la ordenanza general de aduanas, a razón de 25% de los señalados en ella, ha dispuesto el ciudadano Presidente que informe usted a vuelta de correo sobre el particular, en concepto de que por ningún motivo le es permitido hacer rebaja de derechos; y que sería grave la responsabilidad que le cupiera, si en algo se separa de las prevenciones de la ordenanza.

Independencia y Libertad. México, marzo 4 de 1868.

(Matías) Romero

HISTORIA HACENDARIA DEL IMPERIO

Ciudadano Manuel Payno
Presente

Sección 5ª—El ciudadano Presidente desea que se forme una cuenta general, con toda la exactitud que fuere posible, de las cantidades gastadas por el orden de cosas que con el nombre de Imperio trató de establecer en la República el emperador de los franceses, cuya cuenta comprenderá también las cantidades que ingresaron a las arcas de la Intervención, tanto por las contribuciones ordinarias y extraordinarias que impuso ésta en el territorio de la República que llegó a estar bajo su dominio, cuando por ministraciones hechas por el gobierno francés, directamente o por súbditos de aquel gobierno, en forma de préstamo o cualquiera otra.

Creyendo que usted reúne las cualidades necesarias para desempeñar cumplidamente este importante trabajo, el ciudadano Presidente ha tenido a bien comisionar a usted para que lo forme. Esta secretaría cuidará de participar este nombramiento a la tesorería general de la nación y a las demás oficinas de la federación, de las que necesitare usted datos, para que le faciliten a usted los que requiere la formación de este trabajo.

No dudo del patriotismo de usted que aceptará la comisión que se le confía.

Independencia y Libertad. México, febrero 6 de 1868.

(Matías) Romero

EL GRAL. JOSÉ MARÍA CARBAJAL
REFUTA A MATÍAS ROMERO

Camargo. febrero 1º de 1868

Sr. don Francisco Zarco

Mi querido amigo:

Hasta ahora no había tenido noticia de una carta del Sr. don Matías Romero, ministro mexicano en Washington, que escribió en México el 29 de noviembre de 1867 y publicó en el *Diario Oficial*, carta en que hace mención de mi persona, presentando ante mis compatriotas muy desfavorablemente mis trabajos en los Estados Unidos el año de 1865 y 1866, en desempeño de la comisión que me confirió el gobierno de la República para agenciar recursos con qué sostener la independencia nacional. Dicha carta la veo reproducida en el número 37 del periódico oficial del gobierno del estado de Nuevo León.

Una larga y peligrosa enfermedad que he sufrido no me ha permitido presentar a mis conciudadanos un manifiesto que ponga en claro todos mis actos y justifique mi conducta, refutando erróneos relatos que han circulado en perjuicio mío y destruyendo las calumnias de mis enemigos. Más tarde me ocuparé de esto. Por ahora sólo suplico a usted dé lugar en las columnas de su valioso periódico *El Siglo diez y nueve*, a esta sucinta contestación que doy a algunos párrafos de la carta mencionada del Sr. Romero.

Dice el Sr. Romero que yo celebré, a fines de julio de 1865, "un contrato leonino y ruinosísimo con Daniel Woodhouse, que se suponía firmado en San Carlos Estado de Tamaulipas, algunos días antes". Y sigue: "Aunque no se le prevenía en sus autorizaciones que necesitara de

mi aprobación para la validez de sus actos, él trató de obtenerla y yo no se la pude conceder."

En el primer punto no refiere los hechos el Sr. Romero como ellos son. Califica de leonino y ruinosísimo el contrato con Woodhouse, cuando él sabe muy bien que ese contrato nunca se concluyó ni tuvo efecto, que faltó un suplemento que establecía las garantías y ventajas necesarias para nuestro país, que no quiso firmar el impostor Woodhouse, y que faltó también la entrega a mí de diez millones, de los supuestos bonos de la compañía Woodhouse, que éste aseguraba que servirían como dinero efectivo, que producirían veinte millones de pesos en el mercado, pudiéndose comprar con ellos también lo que se quisiera de la plaza de Nueva York. Y en fin, que Woodhouse faltó también a su compromiso de entregarme en dinero efectivo y libranzas negociables al firmarse y entregarse el contrato: tres millones de pesos para mi pronto regreso. Sabía, además, el Sr. Romero, cuando esto escribió y al suceder los hechos en Nueva York, que luego que Woodhouse faltó a sus compromisos y que descubrí la clase de hombre que era le retiré los poderes y todas las facultades que le había dado; suspendí, revoqué y anulé en todas sus partes el contrato en el estado en que se encontraba, y que luego nombré por parte de la República, por el término de un año un abogado que defendiera los intereses de nuestro país y vigilara y persiguiera en los tribunales a Woodhouse si éste trabata de perjudicar a México. De todo dí parte al gobierno al Paso del Norte; y éste en su vista declaró nulo el contrato.

El segundo punto que asienta el Sr. Romero de que yo solicité su aprobación para la validez de mis contratos con Woodhouse, no es cierto. Lo que le pedí y él me dio, como era su deber, fue un certificado autorizado por la Legación de ser genuina mi comisión, y de estar firmadas mis autorizaciones por el ministerio de Relaciones Exteriores de la República. Después, cuando el gobierno me previno obrara de acuerdo con el Sr. Romero y a él le ordenó aprobar el primer contrato que yo celebrara siendo de más pronta realización que algún otro suyo, sujeté a su aprobación el que luego celebré con la casa banquera de los Sres. John W. Corlin y Cía., al que agregó él dos artículos de poca entidad que

fueron admitidos por los contratistas. Estos señores, con grandes sacrificios y loables esfuerzos en favor de la causa de nuestro país, hicieron imprimir (con costosos grabados) los bonos mexicanos emitidos por mí como comisionado del gobierno y aprobados por la legación y han sido tan grandes sus trabajos, rodeándose de muchos hombres eminentes de los Estados Unidos, que se han podido vender, según dice el mismo Sr. Romero, dos millones de pesos de nuestros bonos a cambio de armas, municiones, etc., etc. Estos señores tomaron tanto empeño en establecer el crédito de la República, como si hubieran sido patriotas mexicanos; escribieron elocuentemente sobre la cuestión francesa, refutando los falsos cargos de Luis Napoleón contra México y poniendo en claro la justicia de nuestro país para pelear heroicamente por nuestros derechos y nuestra independencia; pusieron en un punto de vista favorable y honroso, ante el pueblo americano y ante el mundo, el nombre y virtudes del Presidente Juárez; demostraron la pequeñez de la deuda extranjera de nuestra República, que apenas iguala a la de algunos estados americanos, y mientras la del gobierno de Washington sube a unos tres mil millones de pesos, y apelaron fuertemente a las simpatías e intereses de los americanos, excitándolos a que nos prestaran los auxilios necesarios en los momentos de nuestra desgracia en que solos y aislados luchábamos contra poderosas naciones en defensa del republicanismo y de la libertad de la América. Usted mismo, amigo mío, fue testigo de todos estos trabajos y por súplicas mías daba todos los datos necesarios sobre la historia de la República y el estado de la deuda pública, ayudándome en lo posible para crear simpatías y obtener auxilios para la patria. Y usted conoce a muchas de las personas que secundaron mis esfuerzos en Nueva York y Washington. Es testigo también, de que al abrirse la oficina de la Agencia financiera de la República para la venta de bonos por los Sres. John W. Corlin y Cía. en el número 57, Broadway, New York, izaron nuestra bandera estos señores, y recordará usted que ese mismo día pasaron por aquella calle varios regimientos de tropas americanas que, al enfrenar a nuestro hermoso pabellón, hicieron alto, presentaron las armas, saludaron con el glorioso pabellón de las estrellas y dieron

víctores a nuestra República. Este fue día de júbilo para los patriotas mexicanos que había entonces en New York.

Pues bien, extraño y sorprendente como parecerá a todos los que conozcan estos hechos, olvidando el Sr. Romero la inmensa deuda de gratitud que debemos los mexicanos a tan nobles y generosos colaboradores en los momentos más angustiados y cuando se creía por muchos no existir ya ni la República ni nuestro gobierno, dice el Sr. Romero: "Sin embargo de que veía yo con natural desconfianza a todas las personas de quienes se había rodeado el Gral. Carbajal, porque en lo general no la inspiraban, tuve tan buenas recomendaciones del Gral. Sturm (uno de mis agentes) y él me manifestó tan buen sentido al hablarme, etc., etc." Este Gral. Sturm es el único que inspiró confianza al Sr. Romero, y apenas lo elogia como merece; los demás son despreciados altamente por el Sr. Romero. Sobre esto no haré comentario, lo dejo al buen juicio de mis compatriotas, asegurándoles únicamente que el Sr. Romero no sólo es desmedidamente injusto en lo que dice, sino temerario.

Paso en silencio algunos otros puntos de la carta del Sr. Romero que encierran parcialidad e inexactitud, pero que hasta cierto punto son perdonables como hijos del deseo de ser aplaudido. Mas no puedo menos de llamar la atención del público sobre el decidido empeño que parece tener el Sr. Romero en desvirtuar todos mis trabajos por la causa de la patria y en presentar todos mis actos ante la nación bajo un carácter odioso. En verdad que jamás mi conducta pública ha dado lugar a tan injusta persecución.

En conclusión, el gobierno nacional debe presentar al Congreso un informe de sus actos oficiales durante la última lucha contra los invasores y traidores. Allí aparecerá lo que yo hice para contribuir a la salvación de nuestro país y ojalá que no aparezca algún contrato celebrado posteriormente por el Sr. Romero, que a juicio del Congreso sea "leonino" y peligroso para la nación.

Quedo de usted afectísimo amigo y servidor q. b. s. m.

José M. J. Carbajal

EL GOBIERNO DE JUÁREZ PIDE SE RATIFIQUE LA VIGENCIA
DE LA LEY DE 25 DE ENERO DE 1862

Ciudadanos diputados secretarios
del Congreso de la unión

He tenido la honra de leer hoy al Congreso una comunicación del día 2, de que acompaño copia, que me ha dirigido por telégrafo el ciudadano gobernador del estado de Jalisco, sobre haber sido aprehendidos *infraganti* delito, con documentos justificantes de él, unos conspiradores contra las instituciones generales de la nación, y contra las autoridades legítimas de ella y las particulares del estado.

Consulta el ciudadano gobernador si debe procederse como se ha continuado procediendo en el Estado en los casos de igual naturaleza, con arreglo a la ley de 25 de enero de 1862, o conforme a la de 6 de diciembre de 1856; encareciendo la necesidad de obrar contra los autores de la conspiración con la mayor actividad y todo el rigor que las leyes permitan,

Verbalmente he expuesto hoy al Congreso las graves consideraciones porque cree necesario el gobierno que el Congreso de la unión tenga a bien declarar vigente, por algún tiempo, la ley de 25 de enero de 1862, para reprimir los delitos que se repitan contra el orden y la paz pública y contra las garantías individuales.

Cuando acaban de terminar las operaciones militares de una guerra dilatada, que ha conmovido profundamente toda la sociedad, es inevitable que se quiera todavía, por algún tiempo, poner en acción diversos elementos para trastornarlo. Somos bastante felices disfrutando de más orden y paz que en otras circunstancias semejantes; pero no extinguido por completo el germen de las revoluciones, es necesario

consagrar toda previsión y toda energía para extirparlo e impedir la vuelta de los gravísimos males que todos deploramos.

Además de lo ocurrido en Yucatán, Guerrero y Sinaloa, asoma la guerra civil en Puebla y Jalisco, a la vez que los plagios paralizan y aterran a la sociedad. Tanto, o más que en ningún tiempo, ocurre prontamente el gobierno a todos los puntos de peligro; se cuidan y aseguran las vías principales de comunicación y se va mejorando cuanto se puede la policía de las ciudades. Sin embargo, no es posible cuidar todos los lugares, donde pueden perpetrarse los delitos maquinados por el estímulo de un grande interés, y alienta a los criminales la esperanza de que, si son aprehendidos, una imperfecta administración de justicia les ofrezca la impunidad. Después de tan grande trastorno, no es posible esperar que se improvise en todas partes la acción regular y eficaz de los tribunales.

Nada está más lejos del pensamiento del gobierno, que el deseo de plantear un sistema de sangre que, sobre ser inicuo, sería impolítico. Muy al contrario, cuando estuvo armado con todo el poder de la dictadura, pudo poner en práctica un sistema de inmensa lenidad, limitando la aplicación severa de las leyes a un cortísimo número de los principales culpables. De otro modo, la sociedad entera carecería de garantías, como ha carecido entre nosotros muchas veces, por el deseo de concedérselas excesivas a los grandes criminales. Más de cincuenta años de experiencia, nos enseñan adónde se llega por ese camino.

La votación de una gran mayoría de la Cámara, sobre la proposición que le presentaron hoy algunos de sus miembros, indica que puede ser voluntad del Congreso declarar vigente la ley mencionada; y por esto ha creído el gobierno que debía suspender su respuesta al gobernador de Jalisco por el corto número de días necesarios para que el Congreso dicte su resolución.

En tal virtud, ha dispuesto el ciudadano Presidente de la República, con acuerdo unánime de sus ministros, que dirija, como tengo la honra de dirigir, al Congreso, la iniciativa siguiente:

Proyecto de Ley

"Artículo único.—Se declara vigente, entretanto no se derogue por el Congreso de la unión, la ley de 25 de enero de 1862, sobre los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales".

Independencia y Libertad. México, marzo 4 de 1868.

S. Lerdo de Tejada